



informe fesabid

Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica

Natalia Arroyo-Vázquez
Hilario Hernández-Sánchez
José-Antonio Gómez-Hernández

Índice

Presentación	3
--------------	---

Prólogo	6
---------	---

Resumen ejecutivo	7
-------------------	---

0. Introducción	8
-----------------	---

1. Objetivos y metodología	11
----------------------------	----

2. Los recursos de las bibliotecas públicas: centros existentes, personal, colecciones e infraestructuras	14
---	----

2.1. ¿Cuántas bibliotecas y puntos de servicio hay?	15
---	----

2.2. ¿Cuántas personas trabajan en las bibliotecas públicas?	17
--	----

2.3. ¿En qué colecciones documentales basan sus servicios?	20
--	----

2.4. ¿Cuál es la tecnología disponible en las bibliotecas públicas?	24
---	----

3. Bibliotecas públicas: centros existentes, personal, colecciones e infraestructuras	26
---	----

3.1. ¿Quiénes usan las bibliotecas?	27
-------------------------------------	----

3.2. ¿Cuántas veces acudimos?	33
-------------------------------	----

3.3. ¿Cómo evoluciona el préstamo de la colección?	36
--	----

3.4. ¿Qué otros servicios bibliotecarios ofrecen las bibliotecas?	40
---	----

4. Gastos y financiación	42
--------------------------	----

4.1. Evolución del gasto	43
--------------------------	----

4.2. La financiación de las bibliotecas públicas: el gasto por titularidad	51
--	----

4.3. Los gastos de inversión por titularidad y clase de gasto	56
---	----

4.4. El gasto en bibliotecas públicas en perspectiva amplia	58
---	----

5. La valoración social de las bibliotecas	59
--	----

6. Conclusiones	62
-----------------	----

Referencias	67
-------------	----

Autores
Natalia Arroyo-Vázquez
Hilario Hernández-Sánchez
José-Antonio Gómez-Hernández
Edita
FESABID
Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación
y Museística.
www.fesabid.org / info@fesabid.org
Madrid: FESABID, 2019
ISBN: 978-84-939694-2-4

Diseño y maquetación
www.yosoypep.com

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.



Con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte.



PRESENTACIÓN

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) reúne a las asociaciones y colegios profesionales más relevantes del sector.

Entre las funciones de FESABID destaca la de sensibilizar y visibilizar el importante papel de las bibliotecas y profesionales que en ellas trabajan como intermediarios de la información, del conocimiento y la cultura en la comunidad.

Una de las acciones que se desarrollan con este fin es la promoción o la realización de estudios que, como éste, plantean ideas importantes en las que se considera necesario poner el acento y trabajar activamente. Entre ellos destacan el *Estudio FESABID sobre los profesionales de la información*, el *Estudio sobre el valor económico y social de las bibliotecas* o el *Estudio sobre las tendencias en el consumo de la información*.

En esta ocasión, presentamos un riguroso estudio sobre la situación de las bibliotecas públicas en España, a través de los datos y estadísticas publicadas desde el año 2010. Los autores, Natalia Arroyo, Hilario Hernández y José Antonio Gómez realizan un análisis y diagnóstico del panorama tras la crisis económica y nos presentan una situación y unas conclusiones que, no sólo plantean el estancamiento de la evolución de las bibliotecas en España; evidencian, además, los desequilibrios y cargas, cada vez más elevados, que tienen que afrontar los municipios con los riesgos y diferencias que esto puede ocasionar.

Los autores dejan clara la necesidad de trabajar con indicadores y sistemas de gestión que proporcionen datos con mayor calidad, homogeneidad y con un ritmo de actualización mayor.

Para FESABID, este estudio no sólo es un regalo por parte de los autores, es un apoyo y un motor. Es un apoyo porque ya desde un tiempo a esta parte y sobre todo en los tres últimos años, hemos empezado a salir de nuestra zona de confort para interactuar y trabajar con otros agentes dentro de los municipios y en las comunidades, y se ha identificado la falta de datos claros y estudios en los que se evidencian y justifican nuestra denuncia sobre la falta de inversión en bibliotecas y en políticas bibliotecarias fuertes. Pero, sobre todo, es un motor. Este estudio es un motivo para continuar en la reivindicación y la sensibilización, la *advocacy* para que cargos políticos y ciudadanía identifiquen a las bibliotecas y los servicios de información, así como a las y los profesionales que en ellas trabajan, como verdaderas aliadas para la transformación de la sociedad.

A partir de este estudio debemos emprender las acciones de colaboración y de influencia. FESABID representa a las y los profesionales en órganos consultivos de la administración e interactúa con otros agentes sociales (del ámbito de la cultura y de otros sectores) y es en ellos en los que tenemos que incidir, entre otras cosas, para conseguir que las bibliotecas y los servicios de información sean tenidos en cuenta en los planes de desarrollo tanto a nivel nacional como autonómico. Además, debemos proponer e identificar indicadores y ámbitos de estudio que permitan realizar la foto real del acceso y el nivel de los servicios bibliotecarios en todo el país y, finalmente, conseguir una política pública que establezca equilibrio y equidad en los servicios de biblioteca y de acceso a la información para toda la ciudadanía.

PRÓLOGO

En primer lugar quiero agradecer la rigurosa exposición de los tres expertos que firman este nuevo estudio de FESABID *Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica*. Gracias al análisis de Natalia Arroyo-Vázquez, Hilario Hernández-Sánchez y José-Antonio Gómez-Hernández contamos con este nuevo trabajo que compila, compara y evalúa los resultados de los indicadores del duro período económico que han sufrido las bibliotecas públicas en España entre los años 2010 y 2016.

Permitidme que utilice el adjetivo «duro» para expresar lo que, a través de los resultados destacados por los expertos, y desde mi punto de vista, ha marcado un punto de inflexión que ha ensombrecido la exitosa etapa anterior de expansión del sistema de lectura pública en España, acontecido durante la primera década del siglo XXI.

Sin embargo, durante estos años estudiados hemos sido testigos de la explosión de las redes sociales y la proliferación de la oferta de servicios innovadores desde las bibliotecas mediante distintos canales como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp entre otros. A pesar de que estos nuevos servicios han favorecido enormemente la comunicación y la cercanía con los usuarios, la personalización en las respuestas a la ciudadanía y en gran medida han contribuido a la fidelización de públicos activos de las bibliotecas, no tenemos datos de uso en estos medios, lo que hace replantear seriamente la definición de los indicadores oficiales que estamos utilizando. Unos indicadores que, de haberlos compilado y publicado, podrían habernos mostrado una cara más amable de la gran labor que los profesionales de nuestras bibliotecas han realizado en su afán de obtener mejores resultados, y no tener que plasmar sólo en sus memorias anuales cómo los recortes presupuestarios, por ejemplo, han menguado el crecimiento de sus colecciones.

Curiosamente, esta etapa ha visto surgir algunas iniciativas que apuestan por el valor social de la biblioteca y esto es una muestra de que hemos aguzado nuestro ingenio para responder mejor a los intereses de la ciudadanía, y de que durante los años que alcanzan el estudio hemos mostrado ser más creativos y ha crecido enormemente el activismo bibliotecario.

Sirva este prólogo de aliento a los autores, que los sé bien sensibilizados en los temas relacionados con el papel de la biblioteca impulsora del desarrollo social, y a FESABID para que se anime a planificar una nueva prospectiva capaz de mostrar las tendencias surgidas a partir de esta etapa de crisis económica. Un deseado estudio que pueda plasmar cómo las bibliotecas han sabido reinventar la forma de servir a sus distintos públicos, de abrir sus espacios a una dimensión más humana y creativa. Iniciativas surgidas a partir de la necesidad creada por la propia crisis, de cómo las bibliotecas, atendiendo las necesidades sociales, han ido construyendo un catálogo de servicios de atención para las personas y colectivos más vulnerables. Además, capaz de recopilar el nacimiento de iniciativas que apoyan el valor social de las bibliotecas a todos los niveles y sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible y del importante rol de las bibliotecas para alcanzarlos.

En la actualidad la biblioteca pública, además de ejercer su función tradicional de puerta de acceso a la información a nivel local, de saber impulsar su capacidad formadora, especialmente en aspectos relacionados con la alfabetización informacional y ser la programadora incansable del placer por la lectura, toma una dirección más global, alineada a los objetivos generales de la humanidad que son los que la ONU mantiene

en su Agenda 2030 y que son la guía de la «Transformación de nuestro Mundo» como bien apunta el título de la Agenda. La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas e instituciones bibliotecarias (IFLA) ha sabido cómo trabajar con las bibliotecas para empoderarlas en ese rol capaz de contribuir a su propio desarrollo y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad global.

Glòria Pérez-Salmerón
Presidenta de la IFLA
(Presidenta de FESABID 2014-2018)

RESUMEN EJECUTIVO

Con el objetivo de conocer la situación de las bibliotecas públicas españolas y su evolución, se han analizado los datos estadísticos correspondientes al periodo comprendido entre 2010 y 2016, los últimos disponibles. En este informe se presentan los principales resultados de este análisis y algunas conclusiones derivadas de ellos.

En 2016 se contabilizan 4.633 puntos de servicio de biblioteca pública en España, lo que supone un descenso de 251 con respecto a los registrados en 2010 (5,1%). Como consecuencia, también se registra un menor número de personal en equivalencia a tiempo completo, con un descenso del 4,0%. En 2016 las bibliotecas públicas fueron atendidas por 10.677 personas en equivalencia a tiempo completo, lo que supone una ratio de 2,30 personas por punto de servicio.

Las colecciones siguieron creciendo, hasta alcanzar los 88,2 millones de documentos, un 15,7% más que en 2010. La mayor parte de ellos siguen siendo libros (un 85,6% del total), pero también hay documentos audiovisuales, electrónicos y sonoros (13,0%) y otros documentos (1,3%). Sin embargo, la renovación de estas colecciones ha sufrido un importante retroceso en el período analizado, ya que en 2016 se incorporaron 3,4 millones de documentos, un 35,8% menos que en 2010. Porcentualmente, este descenso afecta especialmente a los documentos audiovisuales, electrónicos y sonoros, pero el descenso en la compra de libros es también destacable.

En el capítulo de gastos corrientes, son precisamente las adquisiciones las que sufren un mayor impacto durante la crisis económica. Entre 2010 y 2016 se observa un descenso del 47,7% en este capítulo de gasto, pasando de 55,7 millones en 2010 a 29,1 en 2016. Por el contrario, el gasto en personal se ha incrementado un 10,3%, mientras que el capítulo de otros gastos se mantiene. Esta evolución desigual ha provocado un mayor desequilibrio presupuestario, con un mayor porcentaje del gasto total destinado a personal (73,7%), mientras que el gasto en adquisiciones se reduce al 6,3% y otros gastos se mantienen en un 20,0% en 2016.

Durante estos años la Administración local ha asumido un mayor compromiso en la financiación de las bibliotecas públicas, hasta representar ocho de cada diez euros en 2016, a la vez que se reduce el apoyo de la Administración autonómica y General del Estado. Los 463,2 millones de euros que sumaron los gastos de las bibliotecas públicas en 2016 fueron financiados en un 78,3% por la Administración local, mientras que las comunidades autónomas aportaron el 20,8% y el 0,9% restantes correspondió a la Administración General del Estado, entidades privadas y otros.

El nivel del gasto en inversiones —edificios, mobiliario, sistemas informáticos y otras infraestructuras— se mantiene hasta 2015 con ligeras variaciones anuales, con un máximo de 69,3 millones de euros en 2014, pero desciende bruscamente en 2016, cuando se registran 24,1 millones, menos de la mitad que la media del periodo 2012-2016.

Respecto a la utilización de las bibliotecas por la ciudadanía, el número de visitas totales a las bibliotecas públicas se mantiene prácticamente, con un descenso del 2,7% vinculable a la pérdida de bibliotecas. Por el contrario, el número de visitas por punto de servicio ha aumentado un 1,3%, situándose en torno a las

veinte y tres mil. Por otra parte, el descenso en el gasto en colecciones parece haber afectado al uso del servicio de préstamo, que también ha caído un 18,8% durante el período de análisis. Finalmente, se puede afirmar que en 2016 había más de 1,4 millones de personas sin servicio bibliotecario en sus municipios, ni fijo ni móvil.

No existen indicios suficientes para analizar la evolución de los usos digitales de las bibliotecas públicas, debido a que los datos sobre visitas a los sitios web de las bibliotecas están incompletos. Lo mismo sucede con los nuevos usos, como el número de actividades organizadas y de asistentes a ellas. Sí podemos decir que, en el período analizado, el porcentaje de las colecciones de libros electrónicos en las plataformas eBiblio y eLiburutegia y de los préstamos realizados a través de ellas, aún supone un porcentaje insignificante respecto al total.

Un análisis detallado de los datos por comunidades autónomas refleja un incremento de las desigualdades interterritoriales en estos años, en función del grado de compromiso de las Administraciones correspondientes, que se manifiesta en todos los capítulos analizados.

Con el fin de obtener una visión más completa de la evolución de las bibliotecas públicas y de los cambios producidos en ellas, es necesario actualizar el sistema de recolección de datos estadísticos de las bibliotecas públicas, ya sea mejorando su fiabilidad y consistencia, acortando los plazos de publicación, incorporando nuevos datos y optimizando su difusión y usabilidad.

0.

informe fesabid

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este informe es analizar la situación de las bibliotecas públicas españolas en el periodo comprendido entre 2010 y 2016, con el fin de hacer un diagnóstico de su estado durante estos años, entre los que se enmarca la crisis económica.

La motivación ha sido obtener una panorámica de cómo el sistema español de bibliotecas ha estado respondiendo a las necesidades comunitarias de acceso a información, lectura, cultura y educación durante el periodo, y llamar la atención cuando sea necesario acerca de los efectos negativos que la recesión vivida en España ha podido ocasionar en este servicio público. Nos preocupa que algunas circunstancias puedan no estar siendo suficientemente detectadas y hemos de ofrecer los datos para su puesta en evidencia. Además, nos gustaría que el estudio pudiera ser útil como una base orientadora para el desarrollo de actuaciones políticas e institucionales que contribuyeran al impulso del sistema bibliotecario y a que las bibliotecas afrontaran los cambios organizativos y de servicio más acordes con la evolución social y las necesidades de la ciudadanía.

El estudio de las bibliotecas públicas en España ha sido realizado durante las dos últimas décadas en numerosas publicaciones con contenidos tanto descriptivos como analíticos, cuya revisión nos obligaría a extendernos excesivamente. Destacaríamos inicialmente algunos vinculados con planes o programas de intervención para el desarrollo del Sistema, como el Informe *Las bibliotecas públicas en España, una realidad abierta* (Hernández-Sánchez, 2001), una obra colectiva coordinada por el Ministerio de Cultura y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para un *Plan de Impulso*, del que efectivamente se derivaron actuaciones de cooperación en el Sistema, campañas de mejora de la imagen social, un logotipo común o el congreso nacional que se viene celebrando desde entonces. Después, en continuidad con esta obra tendríamos un análisis específico de sus colecciones (Hernández-Sánchez, 2003) y un nuevo estudio de la evolución del sistema en *Bibliotecas públicas en España: Dinámicas 2001-2005* (Hernández-Sánchez, 2008).

Paralelamente la Federación de Gremios de Editores ha venido publicando, en sus estudios sobre *La lectura en España* coordinados por José A. Millán, descripciones sintéticas del estado de las bibliotecas (publicadas en 2002, 2008 y recientemente en Gómez-Hernández (2017), y específicamente en sus informes sobre *Hábitos de Lectura y compra de libros en España* (Conecta, 2012; 2018) (en adelante, HLE) incluye anualmente aspectos como la población que visita las bibliotecas, las razones de uso y su valoración de las mismas, a partir de la consulta a una muestra de la población.

A principios de esta década se publicaron informes sobre las bibliotecas públicas (Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2012; Carrión-Gútiérrez, 2013), y en general los estudios de los últimos años se centraron sobre todo en cómo estaba afectando la crisis en las bibliotecas públicas españolas (Villoldo-Gómez, Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2012; Arroyo-Vázquez, Hernández-Sánchez y Villoldo-Gómez, 2012; Gómez-Hernández, 2012; Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2014; Fernández-Vara, 2014; Pérez-Salmerón, 2014), así como sobre sus actuaciones frente a ella (Gómez-Hernández, 2013; Merlo-Vega y Chu, 2015) y su valor económico y social en España (Gómez-Yáñez, 2014) o en comunidades como Cataluña (Togores, 2014) o Navarra (Hernández-Sánchez, 2016).

En este marco —cuando en términos de evolución del PIB y de las estadísticas de desempleo se da por finalizada la crisis económica— se hace preciso investigar la situación de las bibliotecas públicas: si está habiendo una recuperación también en las mismas, si por el contrario se están estancando o aumentando la desigualdad inter-autonómica en sus servicios y recursos, y cómo deben evolucionar tras los cambios no solo económicos sino también tecnológicos y culturales vividos en la actual década. En ella hemos vivido un periodo en que se ha interrumpido una tendencia de crecimiento y mejora continuada desde principios de los años dos mil, y nos acercamos a una nueva década en la que deberán recuperar el tiempo perdido y transformar sus servicios para una sociedad enfrentada a retos como la desinformación y la desigualdad informacional, la aceleración tecnológica, el aprendizaje permanente, la sostenibilidad o la emergencia de nuevas prácticas y formas de consumo cultural y ocio.

Se anticipa algo que es más que una intuición: la necesidad de afrontar un cambio de paradigma. Tanto las consecuencias de la crisis (el aumento de las desigualdades y la población en riesgo de pobreza, por los recortes en servicios públicos) como las transformaciones socio-informativas que se vienen produciendo de manera acelerada imponen a las bibliotecas públicas cambios en la gestión y en las prioridades. Se trata de redefinir las funciones básicas, atender a las nuevas necesidades y sensibilidades sociales, determinar los públicos preferentes, reforzar la vinculación con la comunidad como servicio de la Administración más cercana a la ciudadanía, y optimizar los recursos tanto económicos como informativos (de ocio, cultura y educación) y de socialización en que basan sus servicios.

Son procesos de cambio complejos, que requieren un mayor apoyo desde la financiación pública, una reflexión profesional profunda y un ejercicio de visión estratégica que debe basarse en un conocimiento y comprensión de la situación actual. Contribuir a ese diagnóstico necesario es la motivación del presente informe.

1.

informe fesabid

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Nuestro objetivo es comprender la evolución de las bibliotecas públicas españolas entre 2010 y 2016, considerando como hipótesis a verificar que en estos años el desarrollo de los servicios bibliotecarios sufrió un claro estancamiento, que en realidad puede interpretarse como retroceso tras unos veinte años de mejoras continuadas si nos remitimos a los años noventa.

Esta observación genérica —que se materializa de modo muy distinto en las distintas nacionalidades y regiones de España— debe ser descrita de manera rigurosa y precisa, pues afecta a servicios públicos relacionados con un derecho básico, el del acceso a la información, que hay que contemplar desde un enfoque actual de los procesos y necesidades informacionales de los usuarios.

El análisis se basa principalmente en los datos e indicadores disponibles de la principal fuente estadística, *Bibliotecas públicas españolas en cifras* (Ministerio de Cultura y Deporte, 2018a) (en adelante BPEC, que será la fuente de los gráficos, salvo que se especifique otra). Además en algunos casos se complementa con otras series como la *Estadística de bibliotecas* (INE, 2018), el *Anuario de Estadísticas Culturales* (Subdirección General de Estadística y Estudios, 2018) o la *Panorámica de las 53 bibliotecas públicas del estado* (Ministerio de Cultura y Deporte, 2019). Son fuentes con distinto alcance, pues su universo es diferente; así, el INE no solo analiza las bibliotecas públicas como BPEC sino todas las tipologías: Biblioteca Nacional, bibliotecas centrales de comunidades autónomas, públicas, de instituciones de enseñanza superior y especializadas. En este estudio se ha considerado como principal fuente de datos BPEC porque proporciona datos anuales de nuestro objeto de análisis, mientras que el INE los presenta cada dos años, y permite la desagregación por regiones y por provincias.

Los datos se analizan para el conjunto de España, pero en algunos casos también hacemos una valoración comparativa de la situación inter-autonómica, para comprender los problemas y desigualdades que aquejan al sistema bibliotecario español. E igualmente, el análisis nos permitirá señalar algunas carencias de los modelos de recogida de datos estadísticos usados hasta ahora, y que nos llevarán a proponer la inclusión de nuevos ítems en el proceso de obtención de información.

Hemos tenido que realizar, para prevenir inexactitudes, una revisión y contraste de datos mediante consultas directas a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, al observar ocasionales modificaciones cuando se completan o se hacen correcciones posteriores a la publicación inicial de los datos. También hemos identificado inconsistencias o erratas en la transcripción numérica o hemos dejado de considerar resultados cuando el porcentaje de respuesta era tan bajo que no se podía considerar representativo, como en el caso de los sitios web, que tienen una respuesta inferior al 50%. Afortunadamente se han podido incorporar los resultados de Cataluña entre 2011 y 2013, que no estaban disponibles en un principio, y en algún caso hemos debido realizar estimaciones para tener series totales comparables para el conjunto de España. Por último hemos incorporado datos adicionales facilitados por la Subdirección General cuando no figuraban en BPEC, y unificado la interpretación de información que se podría estar atribuyendo de forma distinta en sucesivas ediciones, como ocurre con algunas bibliotecas autonómicas que pueden ser

consideradas públicas o no por el INE (Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2014). Los datos sobre los que se ha trabajado finalmente para el análisis se han tomado entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2018.

Además, debemos señalar que los modelos de recogida de datos tanto del INE como de BPEC suponen ciertas limitaciones, por estar basados en normas que en algunos aspectos han quedado superadas en relación con los servicios actualmente demandados y asumidos por las bibliotecas públicas. Como es sabido, tienen en cuenta sobre todo aspectos materiales de infraestructuras, superficies disponibles, recursos económicos y humanos, colecciones, transacciones o préstamos y visitas, pero no se recogen aspectos relevantes que permitirían apreciar en qué medida cumplen las funciones de inclusión social, formación permanente y en competencias digitales e informacionales, facilitación de espacios de creación o participación, etcétera. Incluso en aspectos cuantitativos, los datos permiten conocer las cantidades totales, pero no la actualidad y el índice de envejecimiento de los documentos (pues los datos de las «bajas» u obras objeto de expurgo no son lo bastante consistentes), la validez de las tecnologías a disposición de los usuarios (pues es difícil conocer el total de ordenadores disponibles, y más su estado, software...) y no se han incorporado indicadores de los servicios innovadores que puedan estar prestando nuestros centros: aplicaciones para dar servicios en dispositivos móviles, iniciativas de cooperación para atender a colectivos y usuarios específicos, desarrollo de programas de fomento lector o apoyo a centros escolares, labores de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, servicios a los usuarios en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera). En general, no hay o no son consistentes los datos sobre usuarios digitales, a los que deberíamos atribuir tanta relevancia como a los presenciales. No sabemos —dado el bajo índice de respuesta— por ejemplo, las visitas web o al catálogo, por lo que no se cuantifican las visitas que se hacen a través de este medio y que implica que en ocasiones se deja de ir a la biblioteca para acciones rutinarias como renovar un préstamo o consultar el catálogo, hacer una consulta o tomar un libro electrónico en préstamo.

Nos centraremos por tanto en hacer una radiografía de las bibliotecas públicas españolas de acuerdo con las estadísticas oficiales disponibles y valoraremos, mediante la reflexión y la crítica, qué necesidades informativas nos han quedado pendientes para una comprensión más exhaustiva del estado del Sistema y sus perspectivas.

Un informe como este tiene algunas limitaciones que deben explicitarse. En primer lugar, asumimos que habría sido significativo incorporar una metodología comparativa no solo referida al interior de España o a la evolución cronológica, sino con la situación de conjunto en la Unión Europea. Ello, sin embargo, habría exigido una revisión de las estadísticas bibliotecarias país por país, y solo podría haber sido abordado de modo cooperativo, dando lugar a otra investigación, que creemos muy necesario abordar en próximos estudios quizás desde organizaciones europeas como EBLIDA o el Parlamento Europeo.

En segundo lugar, también habría sido interesante poder comparar la situación de las bibliotecas con los de otros servicios públicos sociales, culturales, educativos, y hacer una evaluación de ámbito municipal o local, pero tanto la dificultad de disponer archivos de datos y la complejidad para obtener y manejar esta información nos ha hecho centrarnos en el terreno de bibliotecas en perspectiva interna y referida a España diferenciando únicamente por autonomías cuando os ha parecido más significativo.

2.

informe fesabid

LOS RECURSOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS: CENTROS EXISTENTES, PERSONAL, COLECCIONES E INFRAESTRUCTURAS

2.1. ¿Cuántas bibliotecas y puntos de servicio hay?

BPEC registró en 2016 un total de 3.699 unidades administrativas (un 5,3% menos que en 2010) y 4.633 puntos de servicio (en adelante, PS) de biblioteca pública en España (un 5,1% por debajo de los datos de 2010, lo que supone disponer de 251 puntos de servicio menos). Estos datos (por más que una parte de ese descenso pudiera ser debida a un efecto contable en función del número de respuestas) reflejan un importante descenso en el número de bibliotecas públicas y puntos de servicio.

Las cifras vistas por comunidades autónomas refieren un incremento de la desigualdad, pues en algunas se incrementan o mantienen, a diferencia de otras. Las que registran mayores pérdidas en términos porcentuales son Comunidad Valenciana (-17,5%, con 92 PS menos), Castilla-La Mancha (-12,1%, 68 PS menos), Extremadura (-11,3%, 51 PS menos), Illes Balears (-10,4%, 14 PS menos) y Canarias (-9,1%, 16 PS menos). Por el contrario, en el período señalado se registra un mayor número de puntos de servicio en Cataluña (11,7%, con 42 bibliotecas más), Cantabria (5,8%, 3 PS más), Galicia (5,2%, 17 PS más), La Rioja (4,3%, 1 PS más) y Comunidad de Madrid (3,6%, 8 PS más).

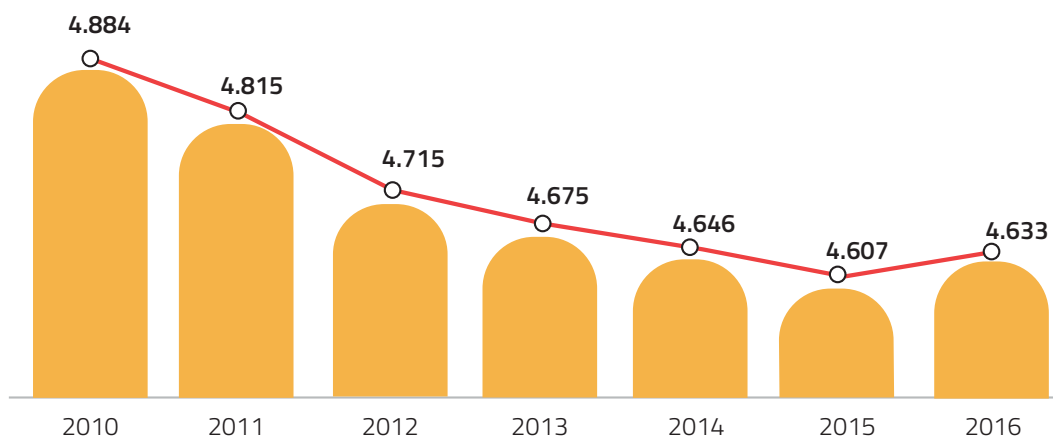


Gráfico 1. Evolución en el número de puntos de servicio de biblioteca pública en España, 2010-2016.

2.

informe fesabid

Los recursos de las bibliotecas públicas: centros existentes, personal, colecciones e infraestructuras

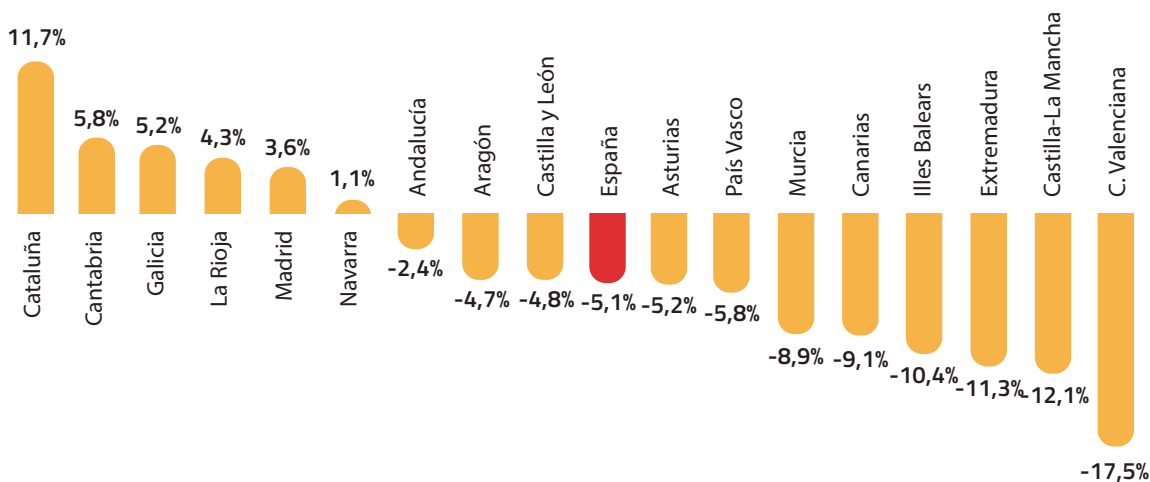


Gráfico 2. Diferencia en el número de puntos de servicio en España entre 2016 y 2010, por comunidades autónomas.

La tendencia a la baja del número de bibliotecas públicas también queda atestiguada por el INE, que en 2016 registró un total de 4.035 (lo que supone un 60,8% de todas las bibliotecas del país), y 5.025 puntos de servicio. El crecimiento toca techo en 2010, con 5.490 puntos de servicio, y se registra un descenso del 8,5% en el periodo, sin que parezca haber una recuperación en 2016. En general comenzó reduciéndose el número de puntos de servicio, y a partir de 2012 también se empieza a materializar el descenso de bibliotecas como unidades administrativas (Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2014).

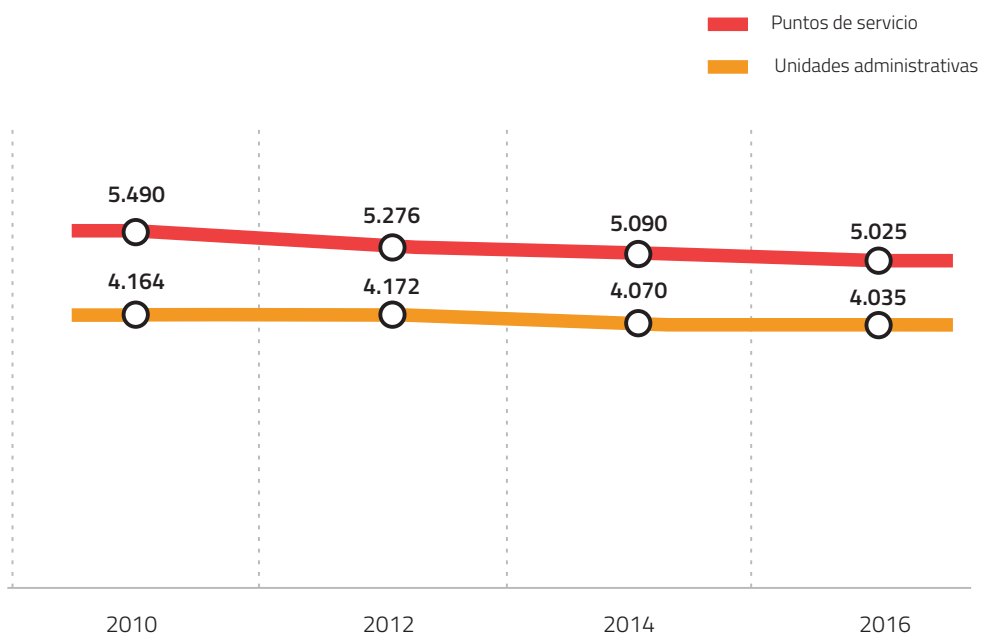


Gráfico 3. Evolución en el número de unidades administrativas y puntos de servicio de biblioteca pública en España, 2010-2016. Fuente: INE.

Un elemento complementario a la reducción de las bibliotecas es que su tamaño medio, en relación con la superficie de sus instalaciones, aumenta, una consecuencia del hecho de que las bibliotecas que se cierran y dejan de contar para el cálculo son habitualmente los puntos de servicio más pequeños. Eso explica que pasemos de 287 m² a 349 m² en la superficie media de las bibliotecas.

Para completar el servicio bibliotecario se ha mantenido una red de bibliobuses cuya labor hay que valorar muy positivamente (Comalat, 2018) a pesar de estar mal distribuida, pues deja carencias en bastantes comunidades autónomas de población dispersa. Globalmente suponen un número de 77 puntos de servicio, que atienden en 2.006 poblaciones menores que en las que no hay instalaciones fijas, y que suman una potencialmente usuaria población de casi once millones de personas. Aun así, en 2016 BPEC contabilizaba 1.480.453 personas sin servicio bibliotecario ni fijo ni móvil en sus municipios; predominan en esta situación las poblaciones menores de 400, 1.000 y 2.000 habitantes, pero hay algunos casos de municipios de hasta 10.000 habitantes sin biblioteca pública.

2.2. ¿Cuántas personas trabajan en las bibliotecas públicas?

En 2016 los datos de BPEC registran 12.532 personas empleadas en las bibliotecas públicas. Si se traducen en equivalencia a tiempo completo (ETC) son 10.677. La media de personal ETC por punto de servicio en 2016, según BPEC, es de 2,30. Tal y como se observa en el gráfico inferior, esta ratio se ha estabilizado, incluso ha crecido muy ligeramente en los últimos años, lo que es también consecuencia del cierre de algunas bibliotecas pequeñas en las que trabajaría una sola persona, lo que contribuye a elevar el valor medio.

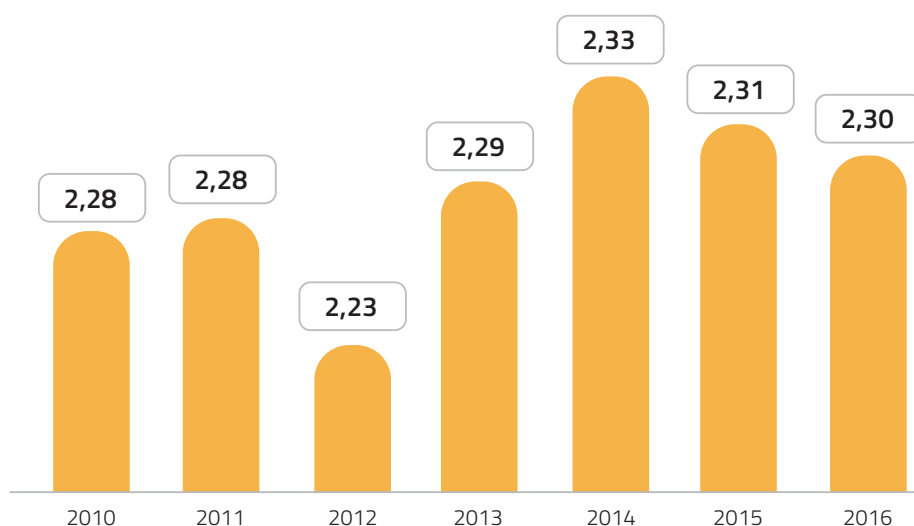


Gráfico 4. Personal ETC por punto de servicio en España, 2010-2016.

La Comunidad de Madrid está por encima de la media, con 6,87 personal ETC por punto de servicio. Solo se le acerca Cataluña, con 4,96. En el lado extremo está Extremadura, con 1,00 persona ETC por punto de servicio, lo que le sitúa como comunidad con la ratio más baja. Otras comunidades por debajo de la media son Aragón (1,21), Baleares (1,41), Castilla-La Mancha (1,52), Navarra (1,63) y Galicia (1,69). Esto tiende a suceder en sistemas de bibliotecas donde abundan puntos de servicio más pequeños por la estructura demográfica basada en muy pequeños municipios. Por el contrario, en las regiones con poblaciones más urbanas la ratio sube, pues tienden a la creación de puntos de servicio más grandes. Estando la media de España en 2,30 personas ETC por punto de servicio, debemos considerar que un alto porcentaje de bibliotecarios o responsables de pequeñas bibliotecas trabajan solos, con bastantes bibliotecas que no llegan a contar ni siquiera con un trabajador a tiempo completo.

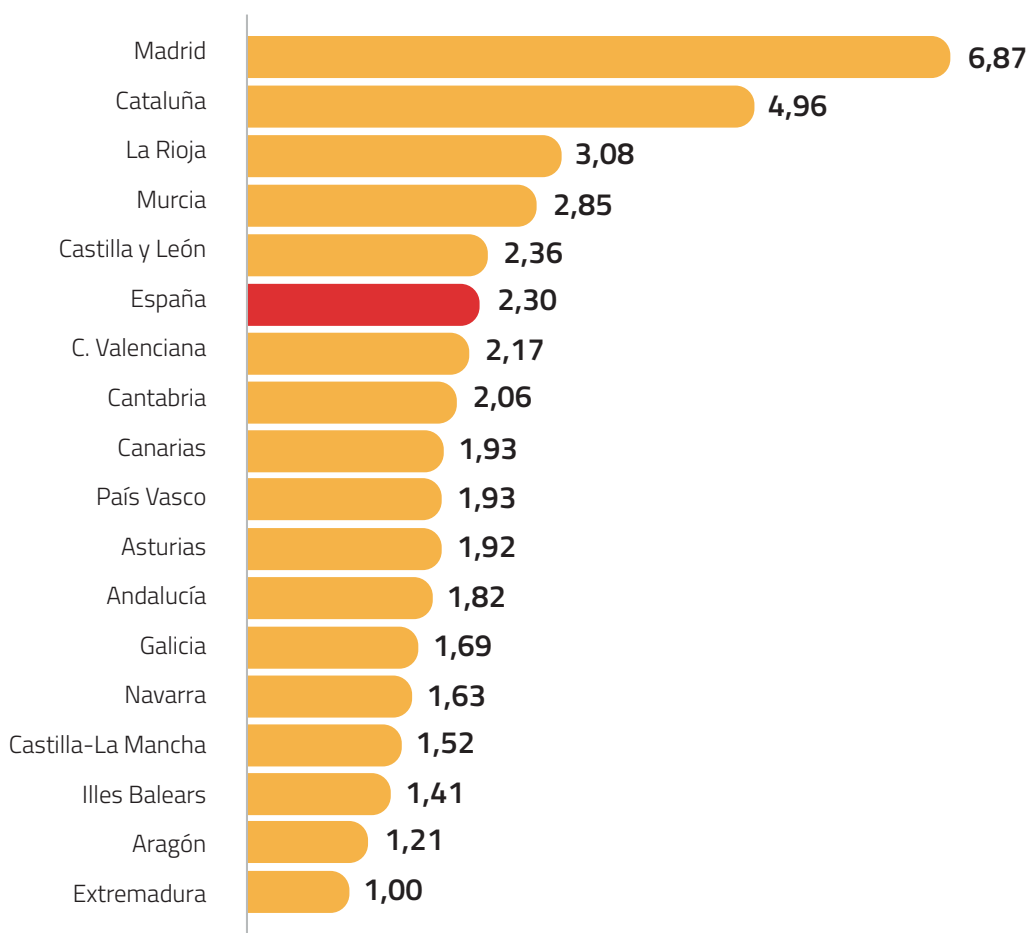


Gráfico 5. Personal ETC por punto de servicio por comunidades autónomas, 2016.

Los datos de personal deben ser interpretados con prudencia, pues en BPEC se observa que las series presentan cierta irregularidad en algunas comunidades autónomas, e igualmente hay altibajos en lo que se refiere al conjunto de la muestra. Los gastos de personal, mayoritariamente referidos a personal funcionario, se mantienen estables, con un descenso en 2012 y un ligero repunte en 2014. Se puede estimar que la pérdida de empleos en el sector debió venir relacionada con el descenso de la contratación de servicios externos a través de la financiación de gastos corrientes, que no se contabilizan en las estadísticas de personal, pero que pueden ser significativos para la calidad de los servicios (personal de servicios de limpieza o mantenimiento informático, personal cultural como cuentacuentos, dinamizadores y mediadores interculturales, moderadores de clubes de lectura). Las partidas económicas de donde procedían los recursos para su contratación sí se redujeron drásticamente.

Aun así, si analizamos en perspectiva inter-autonómica en 2016 el total de personal en equivalencia a tiempo completo por regiones, y lo comparamos con el que éstas tenían en 2010, también se observan diferencias considerables, pues se aprecia cómo aumentan en Cataluña (205 más), Madrid (153), Navarra y La Rioja (en menor medida), y en cambio se pierden en el resto de comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía (-156 bibliotecarios), Canarias (-123), Castilla-La Mancha (-94) y Castilla y León (-103), agrandando la diferencia ya mencionada de los servicios bibliotecarios interregionales.

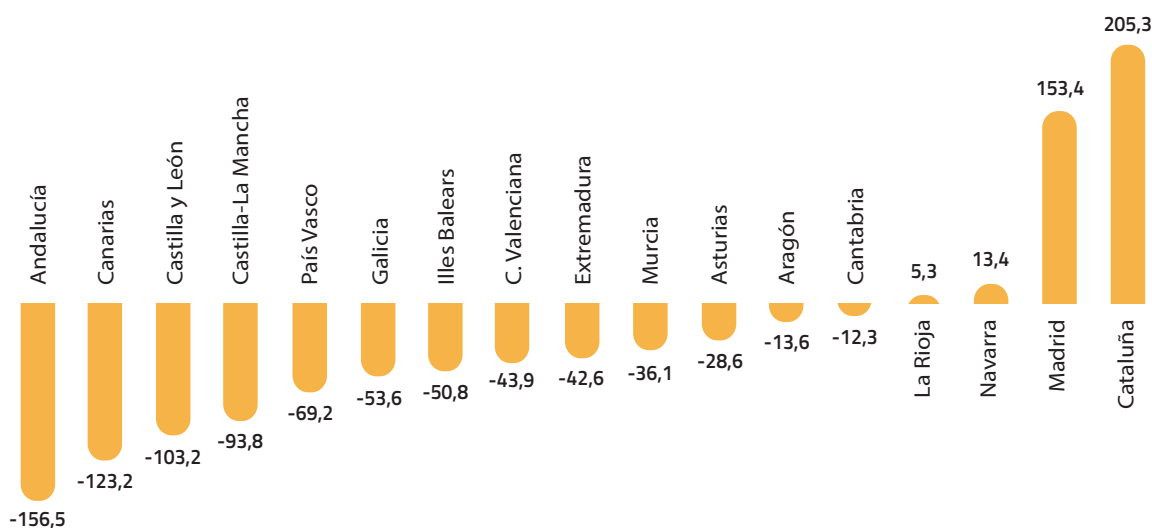


Gráfico 6. Incremento o descenso de personal ETC en bibliotecas públicas, de 2010 a 2016.

Globalmente en el periodo se pierden 442,0 personas (un 4,0%) en equivalencia a tiempo completo en la plantilla de las bibliotecas, y si lo analizamos en términos porcentuales se comprueba que las comunidades autónomas donde la pérdida fue proporcionalmente mayor fue en Baleares, Canarias, el País Vasco y las dos Castillas, con otro grupo de autonomías con reducciones de personal en torno al diez por ciento.

2.3. ¿En qué colecciones documentales basan sus servicios?

Según los datos de BPEC, las colecciones de las bibliotecas públicas españolas ascendieron en 2016 a 88.162.642 documentos en diferentes formatos. La mayor parte de ellos son libros y folletos (75.476.748, lo que supone un 85,6% del total), pero también hay documentos audiovisuales, electrónicos y sonoros (en adelante, AVE) (11.503.150, un 13,0%) y otros documentos (1.182.744, un 1,3%).

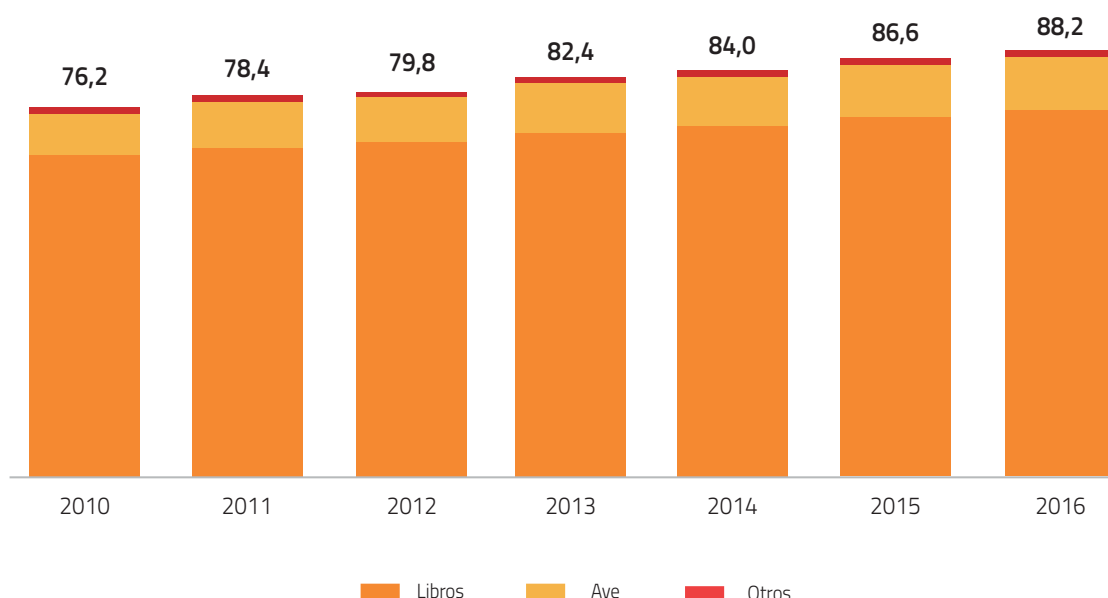


Gráfico 7. Documentos en las bibliotecas públicas españolas por tipo de documento, en millones, 2010-2016.

El número de libros en las bibliotecas públicas se ha incrementado un 13,7% entre 2010 y 2016. El número de AVE también sigue creciendo en las bibliotecas (hay un 32,2% más entre 2010 y 2016), a pesar de que es el tipo de documentos que más descenso está sufriendo en el préstamo y en el que menos se está invirtiendo, como se verá más adelante. Por lo tanto, es de suponer que las colecciones de documentos audiovisuales, sonoros y electrónicos sean de las más envejecidas, ya que su actualización es menor.

El número de documentos por habitante ha seguido creciendo ligeramente, aún a pesar de haberse reducido el gasto en adquisiciones, lo que lleva a pensar que la práctica del expurgo se ha reducido y, por lo tanto, las colecciones crecen a costa de envejecer y perder interés. En 2016 se registraron 1,89 documentos por habitante en las bibliotecas públicas, de los cuales 1,62 fueron libros y 0,25 AVE.

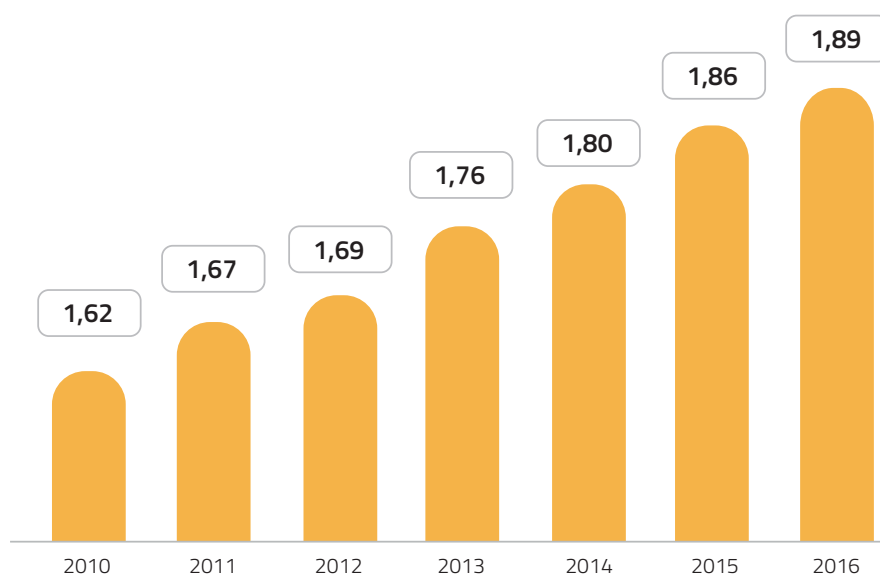


Gráfico 8. Documentos por habitante, 2010-2016.

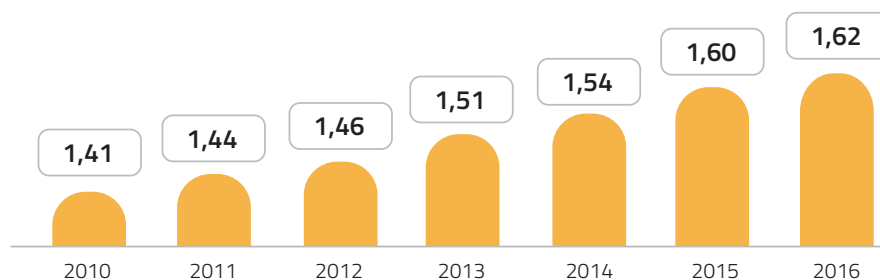


Gráfico 9. Libros por habitante, 2010-2016.

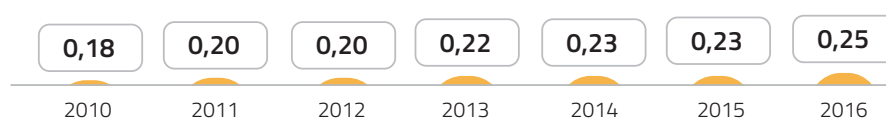


Gráfico 10. AVE por habitante, 2010-2016.

Si observamos ahora cómo ha ido evolucionando la colección en función de las adquisiciones anuales, en 2016 se incorporaron a las bibliotecas públicas 3.394.402 documentos según BPEC, un 35,8% menos que en 2010. El 81,8% de los documentos incorporados fueron libros (2.778.291) y el 18,0% audiovisuales, sonoros y electrónicos (610.465). Este dato está en consonancia con el descenso del gasto en adquisiciones, aunque es sensiblemente menor en términos porcentuales, pues en euros para adquisiciones el descenso llegó al 47,7%. En libros el porcentaje de diferencia en las adquisiciones entre estos años es ligeramente menor, y se sitúa en el 32,6%, lo que significa que se han dejado de adquirir más otros tipos de documentos, como los AVE. En este tipo de documentos se ha registrado en 2016 un 43,6% menos de incorporaciones que en 2010, lo que se explica por la tendencia al consumo privado de los audiovisuales a través de plataformas de *streaming*.

Según recoge la *Panorámica de la Edición Española de Libros 2017* (Ministerio de Cultura y Deporte, 2018b), el precio medio del libro en España se ha mantenido prácticamente (si en 2010 era de 20,27 euros, en 2016 pasa a 19,80), por lo que suponemos que las bibliotecas están encontrando estrategias para comprar más libros por menos dinero.

En 2016 se incorporaron una media de 733 documentos por punto de servicio, mientras que en 2010 fueron 1.083. En 2011 comenzó a observarse un gran descenso, con 775 documentos adquiridos por PS, y 2012 fue el año en que menos fondos se adquirieron, 662 por PS. La media de documentos por biblioteca difiere mucho de unas comunidades autónomas a otras: por ejemplo, Cataluña y Madrid duplican la media nacional, mientras que otras como Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía quedan muy por debajo. Estas diferencias pueden tener su explicación en el carácter más urbano de comunidades como Cataluña y Madrid, pero también en los presupuestos destinados por las entidades competentes.

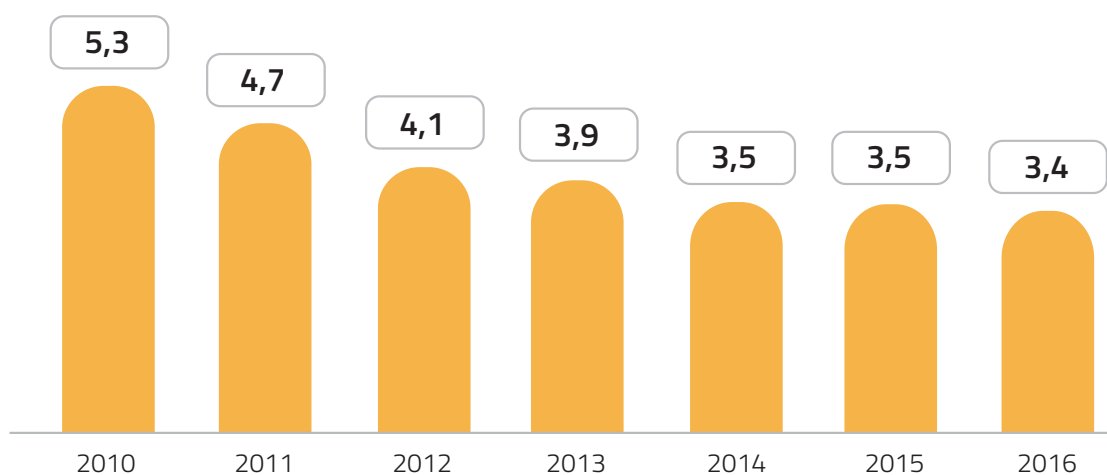


Gráfico 11. Documentos adquiridos por las bibliotecas públicas en España, 2010-2016, en millones de ejemplares.

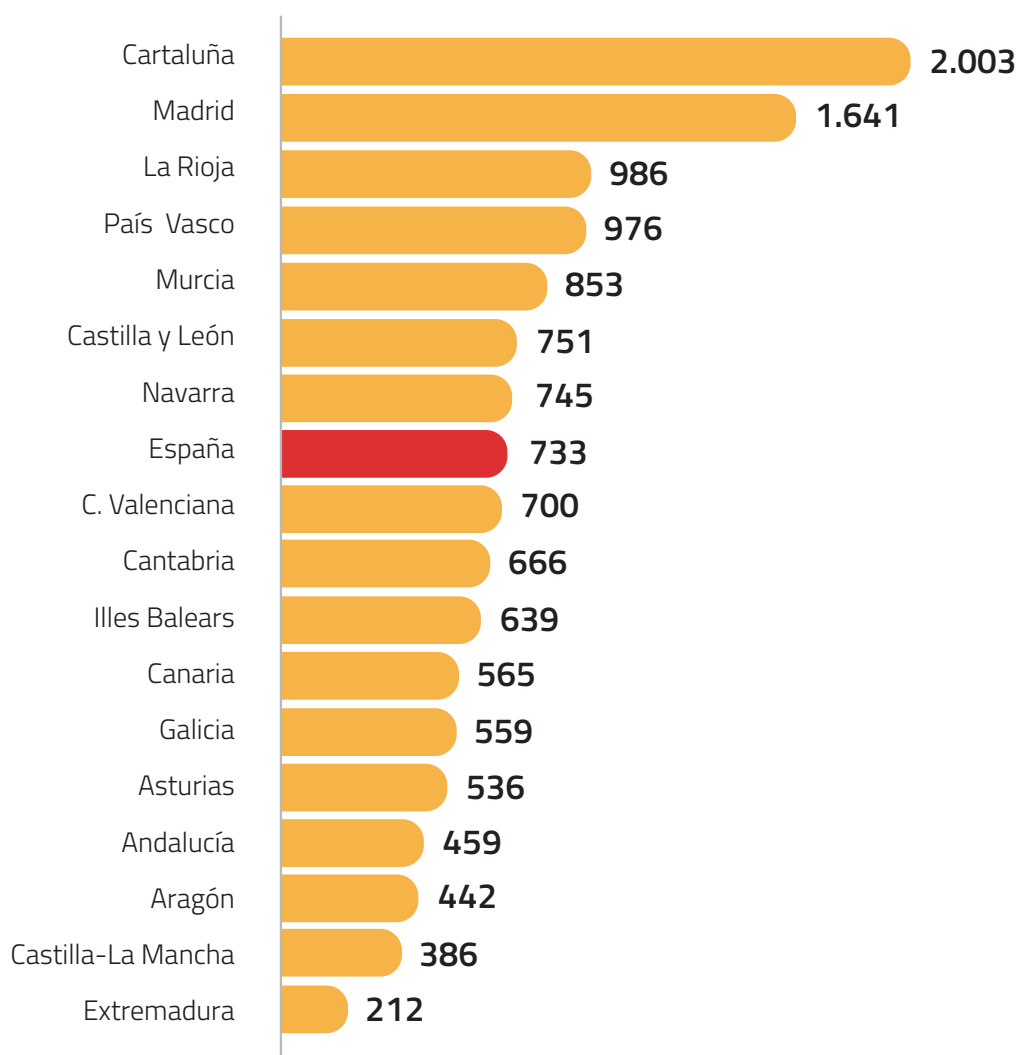


Gráfico 12. Documentos adquiridos por punto de servicio, 2016.

A estas colecciones hay que añadir las ofrecidas a través de eBiblio y otras colecciones digitales públicas para lectura en *streaming* o mediante descarga, como eLiburutegia, que comenzaron en 2014 con 4.098 títulos y 240.157 licencias, y a fines de 2016 alcanzaron —en el caso de eBiblio— la todavía modesta cantidad de 8.233 títulos con 321.452 licencias para toda España (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2016; 2017).

2.4. ¿Cuál es la tecnología disponible en las bibliotecas públicas?

La incorporación de la tecnología a las bibliotecas es algo natural que se debe materializar en la implantación de un conjunto de servicios digitales a través de sus portales web, sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales, en la disposición de herramientas para los procesos de información, aprendizaje y creación de sus usuarios (ordenadores, portátiles, dispositivos electrónicos, software de todo tipo, servicios de conexión de cable y wifi), y la oferta de colecciones digitales propias, gratuitas y contratadas.

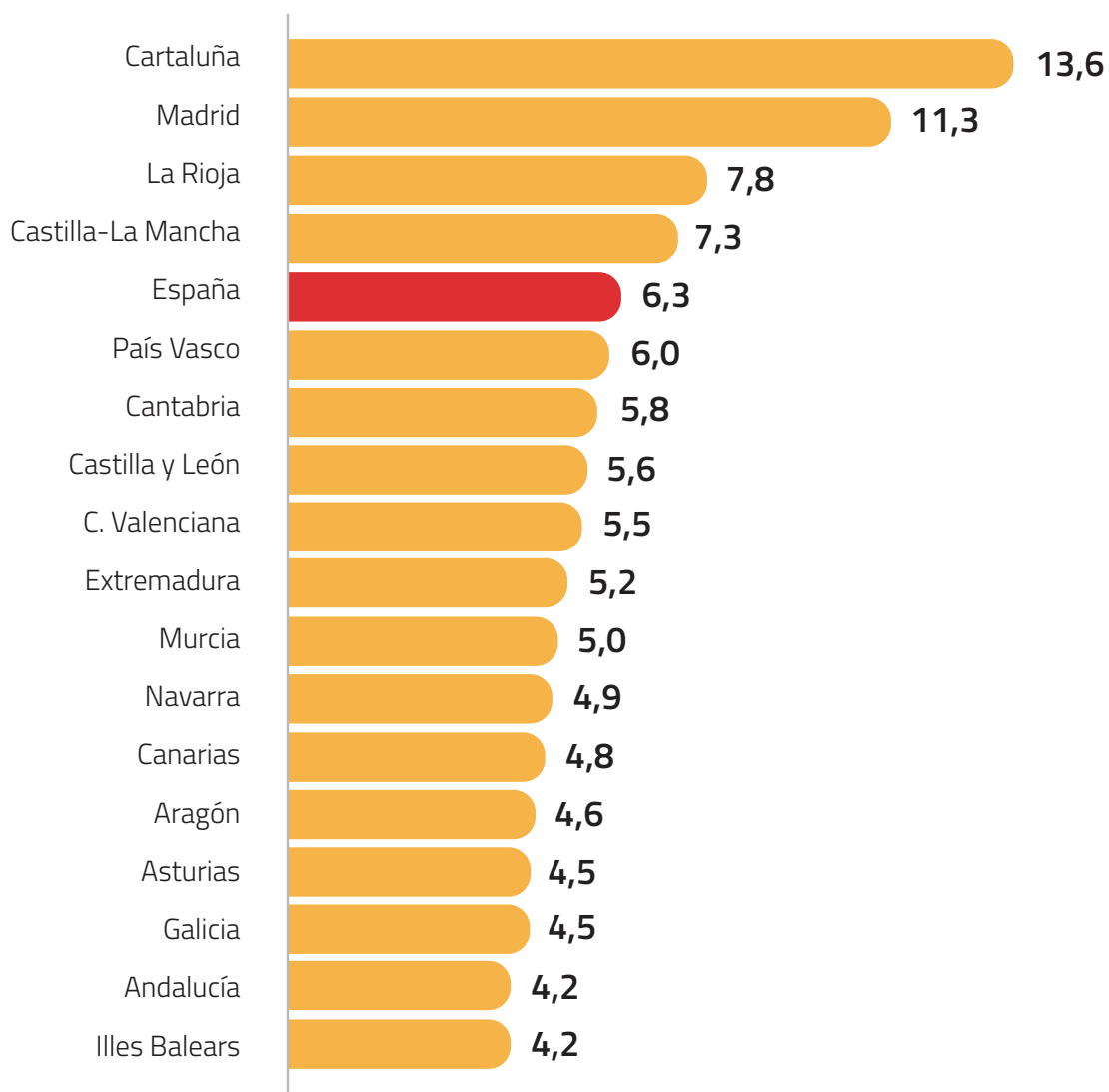


Gráfico 13. Número de ordenadores por punto de servicio en 2016.

En los últimos años las bibliotecas están asumiendo la tecnología como un aliado necesario, pero, desgraciadamente, según los datos de BPEC en 2016 y los años previos los datos sobre servicios electrónicos (número de bibliotecas con página web, con catálogo en línea, con servicio de acceso público a internet y con wifi) resultan incompletos y por ello no podemos valorarlos, porque el porcentaje de respuesta es muy bajo, y cuando las bibliotecas no responden a estas cuestiones debe ser por ausencia de estos recursos. Así, en 2016 sobre la disponibilidad de página web solo responde el 39,3% de las bibliotecas encuestadas, sobre el catálogo en línea el 69,3%, sobre acceso público a Internet el 85,1% y sobre wifi el 77,6%. En todos los parámetros el número de respuestas coincide con el de disponibilidad de dichos servicios, con lo cual se podría pensar que las bibliotecas que no responden serían en muchos casos respuestas negativas, aunque no se puede afirmar de modo absoluto.

Podríamos completar algunos datos sobre la tecnología en bibliotecas públicas acudiendo a los datos de BPEC, que nos señala que en 2016 había 28.994 ordenadores de uso público, la mayor parte de ellos con acceso a internet (72,9%). De media, cada punto de servicio disponía de 6,3 ordenadores de uso público, con grandes diferencias entre comunidades autónomas que se muestran en el gráfico. Pero nos resulta imposible saber su estado de conservación o antigüedad.

La incorporación de la tecnología a las bibliotecas es algo natural que se debe materializar en la implantación de un conjunto de servicios digitales a través de sus portales web, sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales, en la disposición de herramientas para los procesos de información, aprendizaje y creación de sus usuarios (ordenadores, portátiles, dispositivos electrónicos, software de todo tipo, servicios de conexión de cable y wifi), y la oferta de colecciones digitales propias, gratuitas y contratadas.

Y respecto a la evolución del número sesiones de acceso a internet en las bibliotecas públicas (tanto en ordenadores como a través de la conexión wifi), con los datos disponibles pasaríamos de los 15 millones de 2010 a poco más de 23 en 2016, pareciendo haberse estancado, quizás por la mejora de la conectividad de los propios usuarios.

3.

informe fesabid

BIBLIOTECAS PÚBLICAS: PARA QUIÉNES Y CON QUÉ SERVICIOS

3.1. ¿Quiénes usan las bibliotecas?

El número de personas usuarias registradas en las bibliotecas públicas continúa creciendo, aunque muchos de ellos no hayan acudido en el último año para solicitar un préstamo. En 2016 un 37,1% de los españoles tenían carné de bibliotecas públicas, frente al 28,7% de 2010, según los datos de BPEC. En números absolutos, en 2016 se registraron 17,2 millones de personas a las que se considera usuarias por estar inscritas en bibliotecas públicas.

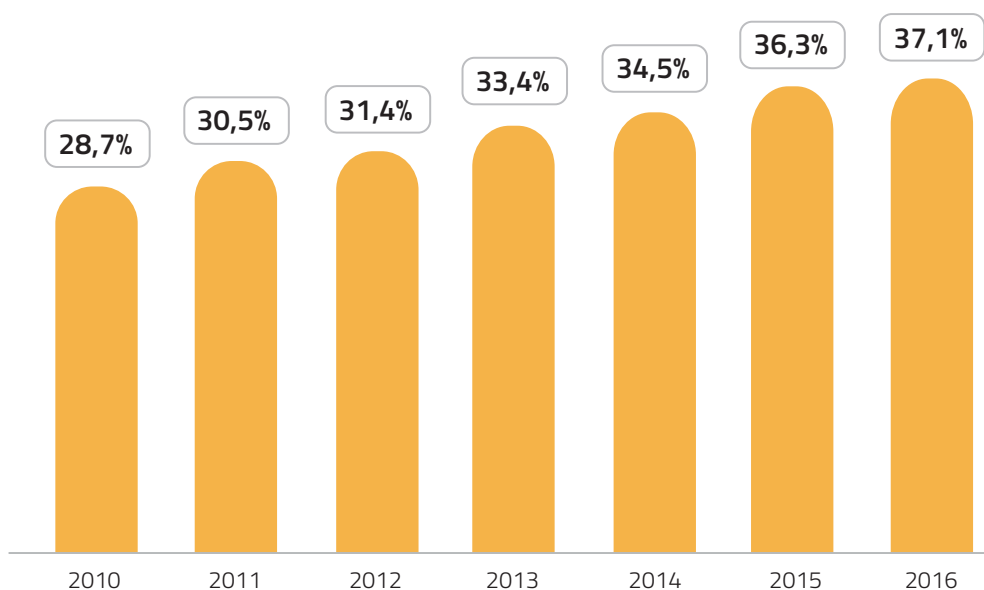


Gráfico 14. Evolución en el porcentaje de población usuaria de bibliotecas públicas, 2010-2016.

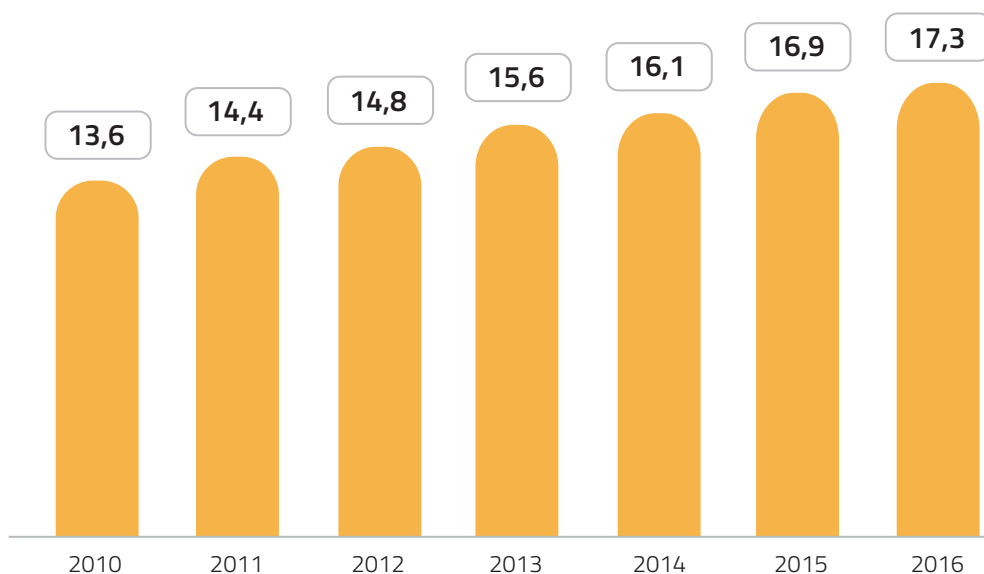


Gráfico 15. Evolución en el número de usuarios de bibliotecas públicas, 2010-2016, en millones.

Las diferencias inter-autonómicas pueden llegar a ser grandes: Asturias (58,4%), Castilla y León (49,5%), Cataluña (49,2%), País Vasco (49,1%), Comunidad de Madrid (46,6%), Extremadura (44,3%) y Navarra (40,6%) están por encima de la media en cuanto al porcentaje de usuarios respecto al conjunto de la población. En el extremo contrario, se sitúan por debajo Canarias (16,2%), Cantabria (19,8%), La Rioja (25,8%) y Andalucía (26,2%).

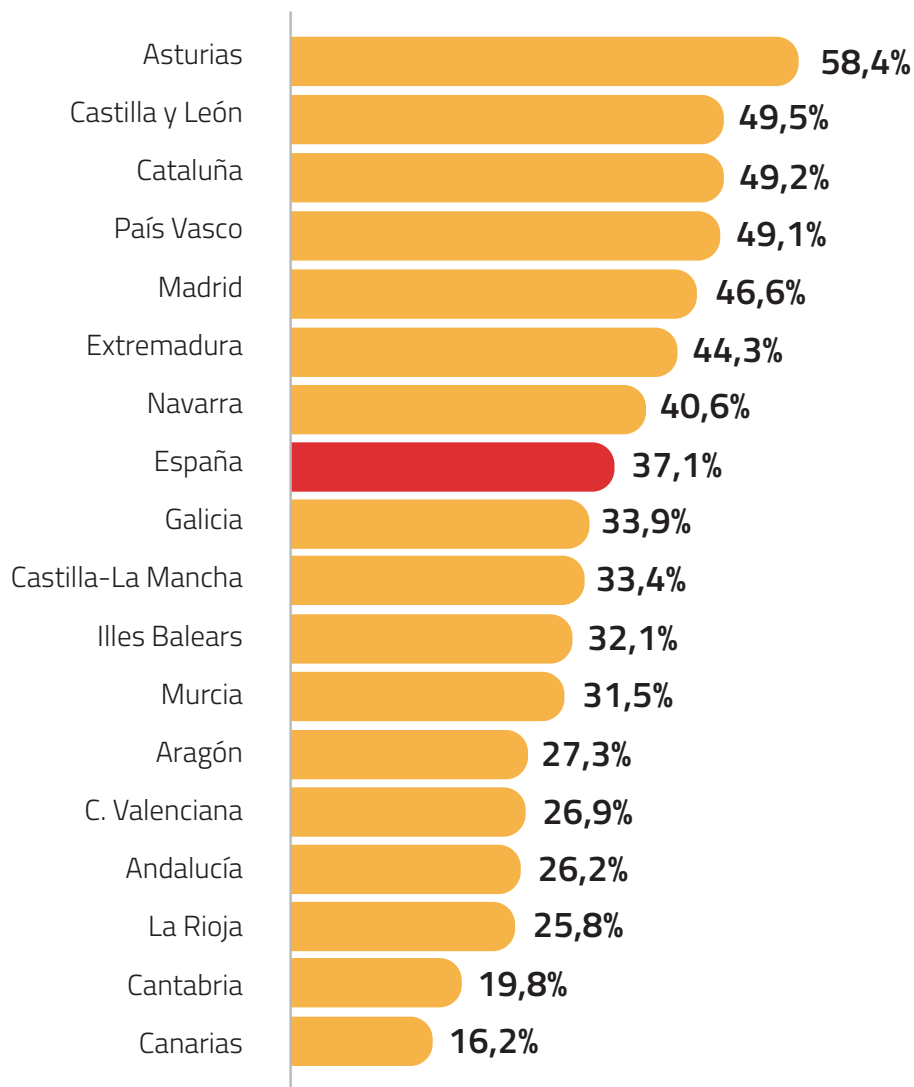


Gráfico 16. Porcentaje de usuarios de bibliotecas por habitante, por comunidades autónomas, 2016.

El número de usuarios registrados de las bibliotecas no deja de crecer en el conjunto y ello aun cuando se observa en algunos municipios una ligera pérdida de usuarios con respecto al año anterior. También hay que tener en cuenta que el descenso de población (entre 2012 y 2015 se producen ligeros descensos anuales de entre el -0,3% y el -0,8%) hace que el indicador vea la cifra incrementada.

Estos datos de los usuarios se refrendan también y se completan con la información derivada del informe sobre *Hábitos de lectura y compra de libros* (Conecta, 2018), referido a mayores de 14 años, y en el que el 31,9% de los entrevistados afirma haber acudido a una biblioteca en 2017, y tener carné de biblioteca el 36,8%. Es una cantidad que se va ampliando levemente en el periodo, y en el que se comprueba también que las personas jóvenes son las que hacen un mayor uso de las bibliotecas, que acuden a la bibliotecas más personas de las que están inscritas o son socias (como muestra el dato de 14-24 años), que no hay diferencia por género en el hecho de ir a una biblioteca pero sí en tener carné (lo que podría vincularse con el uso del servicio de préstamo), que con la edad va descendiendo la asistencia a bibliotecas públicas, y que el mayor nivel de estudios correlaciona positivamente con la condición de usuario de las bibliotecas.

	Ha ido a una biblioteca	Es socio/a
Sexo		
Hombre (2.376)	31,8%	34,2%
Mujer (2.424)	32,0%	39,1%
Edad		
De 14 a 24 (633)	68,6%	59,6%
De 25 a 34 (702)	26,9%	38,2%
De 35 a 45 (985)	32,5%	42,5%
De 45 a 54 (931)	28,2%	35,3%
De 55 a 64 (743)	22,8%	27,4%
De 65 y más (806)	18,0%	20,2%
Estudios		
Hasta primarios (1.168)	18,4%	21,5%
Secundarios (1.845)	32,1%	35,4%
Universitarios (1.787)	41,4%	50,4%
Total (4.800)	31,9%	36,8%

Tabla 1. Evolución del porcentaje de usuarios mayores de 14 años que han acudido o están inscritos en una biblioteca pública según HLE. Totales, por edad y nivel de estudios, 2017.

Por otra parte, cuando se considera usuarios activos a los que sacaron al menos un libro durante el año 2016, vemos que de media solo lo fueron un 9,0% de los españoles. Se trata de un indicador relevante, que también refleja considerables diferencias interregionales¹ en el uso del servicio de préstamo, pero que puede llevar a confusión, porque hay muchas más personas activas en las bibliotecas aunque no usen el servicio de préstamo. Simplemente los datos de visitas, y los que se tienen parciales de entradas a través de la web, incrementarían ampliamente el número de usuarios activos de las bibliotecas españolas.

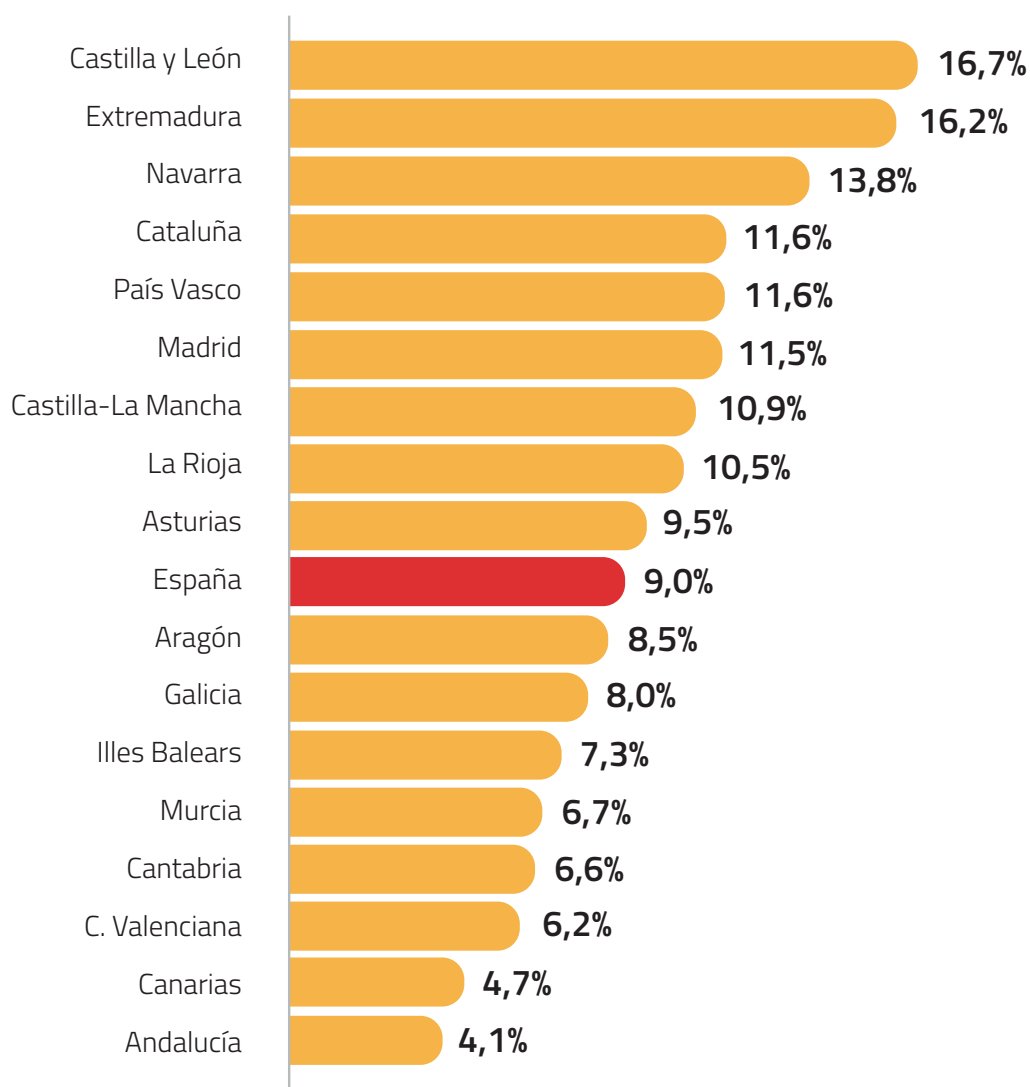


Gráfico 17. Porcentaje de prestatarios activos respecto al número de habitantes, 2016.

¹ Los datos pueden estar consignados en alguna ocasión de manera errónea, sobre todo cuando algún municipio da el mismo número para usuarios totales y prestatarios activos, lo que da resultados por encima de lo previsible según sus otros indicadores.

Si queremos saber qué otras actividades realizan, disponemos de lo que nos dice el ya citado *Hábitos de lectura...* (Conecta, 2018), del que se pueden extraer conclusiones reveladoras:

- Se mantiene e incluso se incrementa el acudir a tomar o devolver libros, que siguen siendo el formato de lectura preferido.
- Se reduce la consulta de materiales en la propia biblioteca, tanto libros y revistas como AVE y electrónicos o informáticos.
- Se reduce el préstamo de materiales audiovisuales, que son el motivo para acudir solo para del 2,5% de los usuarios, ocurriendo algo parecido con el número de los que acuden para usar AVE o materiales electrónicos en la propia biblioteca en 2017.
- También se reduce el uso de ordenadores y dispositivos electrónicos de la biblioteca, lo que sería consecuencia de su envejecimiento y de que los usuarios van teniendo tecnologías más modernas que la biblioteca y mejor conectividad.
- Aumenta el número de personas que afirma ir para reunirse con otras personas.

	2010	2017
Tomar o devolver libros en préstamo	53,2%	55,3%
Consulta de libros allí mismo/lectura en sala	39,8%	25,8%
Va a estudiar		27,5%
Va a estudiar o realizar trabajos del curso con materiales propios	26,5%	20,0%
Va a estudiar o realizar trabajos del curso con materiales propios y de la biblioteca		11,8%
Va a usar recursos informáticos o electrónicos	15,3%	10,0%
Uso del ordenador/Navegar por Internet con el ordenador de la biblioteca	7,6%	4,1%
Préstamos de medios audiovisuales	6,7%	2,5%
Consulta en la misma biblioteca de medios audiovisuales		2,8%
Navegar con su propio ordenador utilizando el wifi de la biblioteca		0,9%
Usar recursos electrónicos		0,1%
Lectura de periódicos y/o revistas	8,4%	5,4%
Acompaña a otra persona	10,5%	9,5%
Queda allí con otras personas	1,2%	4,5%
Otras actividades	3,2%	3,2%

Tabla 2. Tipo de actividades que realizan los mayores de 14 años al acudir a la biblioteca pública en porcentaje de respuestas, según HLE 2010 y 2017.

Respecto a las personas no usuarias, la principal referencia sobre sus motivaciones serían las respuestas dadas también en *Hábitos de lectura y compra de libros* (Conecta, 2012; 2018), que evidencia razones que nos deben hacer reflexionar sobre nuestros servicios:

- Se incrementa el no tener tiempo como principal razón para no acudir.
- Hay más personas que afirman obtener los libros por otros medios.
- Desciende considerablemente el número de personas que aluden a falta de interés por la biblioteca o no tener de costumbre como motivo para no acudir a las mismas.

	2012	2017
No tiene tiempo	35,7%	40,6%
No le interesa, no tiene costumbre de ir a una biblioteca	43,4%	34,6%
Consigue los libros por otros medios	11,5%	15,1%
Prefiere leer / estudiar en casa	12,8%	10,9%
Motivos de salud, está enfermo	3,9%	4,4%
No hay bibliotecas donde vive	2,2%	2,7%
No encuentra los libros que le interesan en las bibliotecas	1,3%	2,2%
No conoce ninguna. No sabe dónde está	3,0%	1,5%
El horario no le conviene, le viene mal		0,9%
No tienen buen servicio, malas instalaciones		0,2%

Tabla 3. Motivaciones por las que se afirma no haber acudido a la biblioteca pública según HLE, 2010 y 2017.

3.2. ¿Cuántas veces acudimos?

Tras unos años de crecimiento, el número total de visitas a las bibliotecas públicas ha bajado en términos absolutos desde los 111,5 millones que hubo en 2010 o los 113,2 de 2011 hasta los 107,2 millones de 2016, que es el menor dato registrado de la serie analizada y supone un 3,9% menos. Sería algo vinculable con la reducción del número de puntos de servicio bibliotecario, pues, de hecho, si se relacionan ambos datos, se observa un leve incremento, que continúa en los últimos años y se mantiene prácticamente en 2016. Así, desde 2010 el número de visitas por punto de servicio ha aumentado un 1,3%, situándose en torno a las veinte y tres mil.

En términos relativos, si consideramos las visitas en relación con los habitantes, dado que en España la población se redujo en el periodo analizado en unas seiscientas mil personas, el indicador está prácticamente estabilizado, manteniéndose en unas 2,30 visitas de media al año por persona, aunque en algunas comunidades autónomas y municipios se observe un leve descenso.

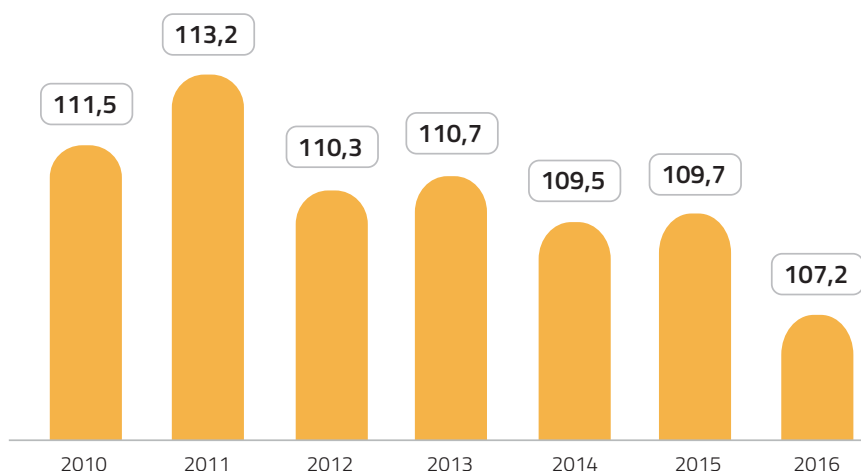


Gráfico 18. Evolución en el número de visitas a las bibliotecas públicas en España, en millones, entre 2010 y 2016.

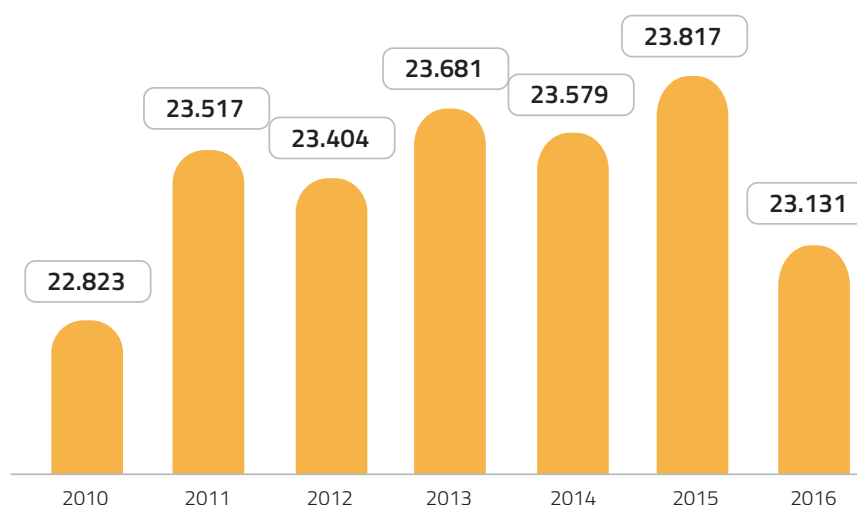


Gráfico 19. Evolución en el número de visitas por punto de servicio de biblioteca pública, 2010-2016.

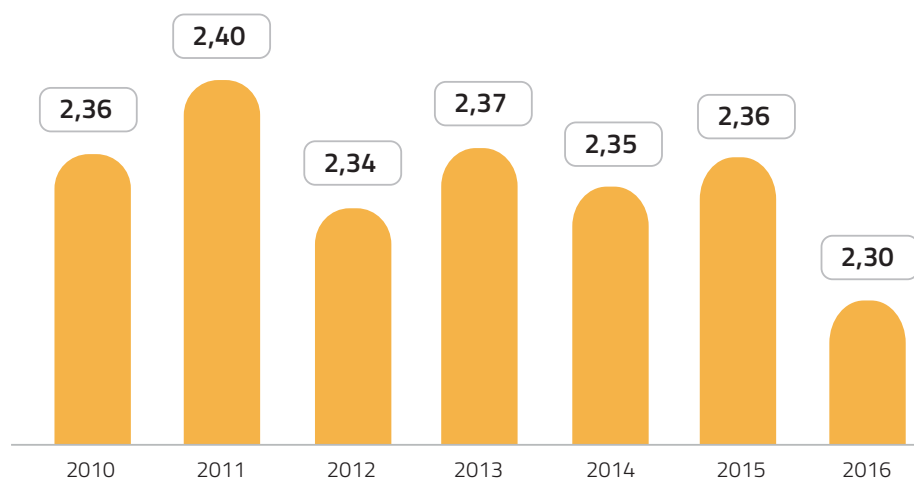


Gráfico 20. Evolución en el número de visitas por habitante en bibliotecas públicas, 2010-2016.

Las comunidades autónomas con más visitas por habitante en 2016, según los datos de BPEC, son Navarra, Castilla y León, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón. Todas ellas se encuentran por encima de la media de 2,30. Por el contrario, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias no superan las dos visitas por habitante.

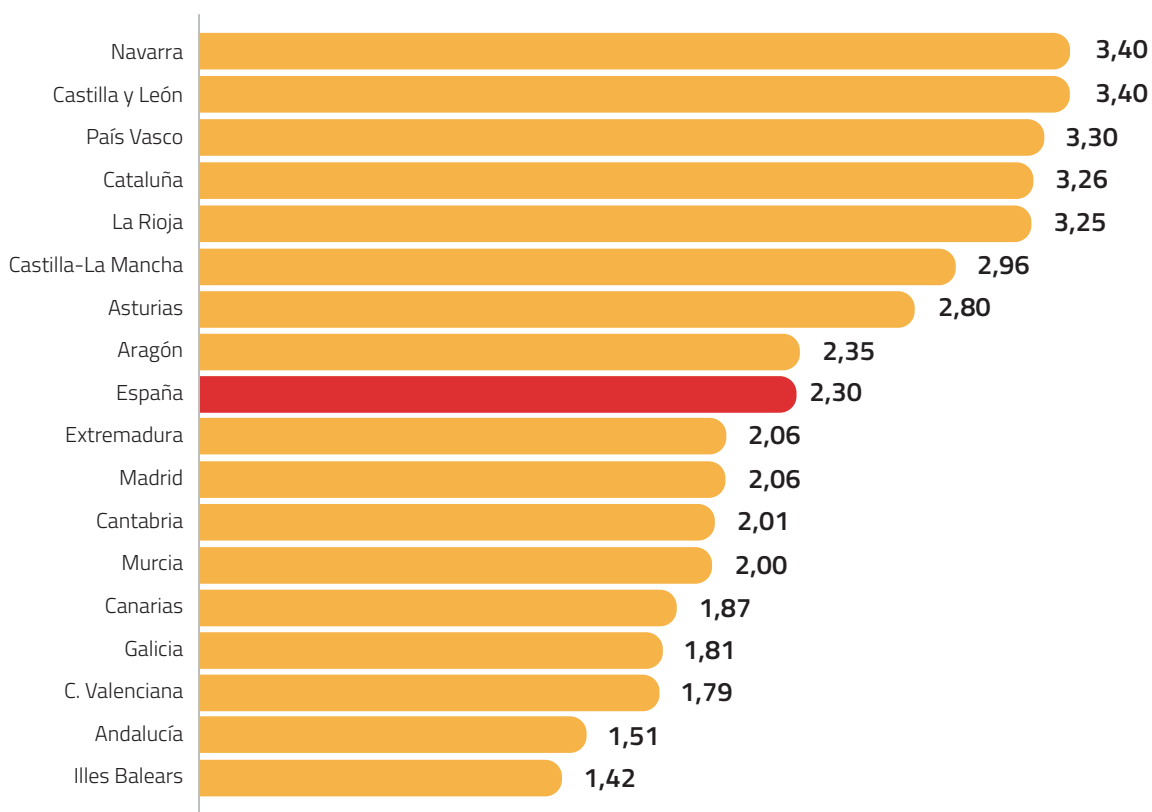


Gráfico 21. Visitas por habitante en bibliotecas públicas por comunidades autónomas en 2016.

Respecto a la disponibilidad de los horarios de apertura que se ofrecen para estas visitas presenciales, parece que en las bibliotecas públicas están aumentado ligeramente, pues desde 2012 hay menos bibliotecas que abren menos de diez horas y más bibliotecas que abren más tiempo según BPEC. El descenso en el número de bibliotecas públicas que abren menos horas podría deberse a la pérdida de puntos de servicio bibliotecario, pues lo lógico es que hayan desaparecido las más pequeñas y, por lo tanto, el peso de las grandes sea mayor en el conjunto de la muestra.

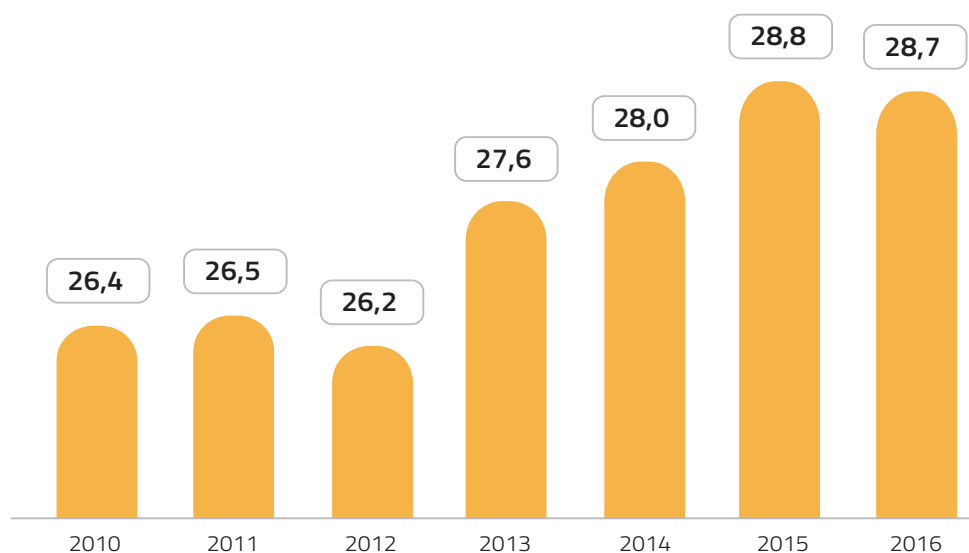


Gráfico 22. Media de horas de apertura semanales por biblioteca pública, 2010-2016.

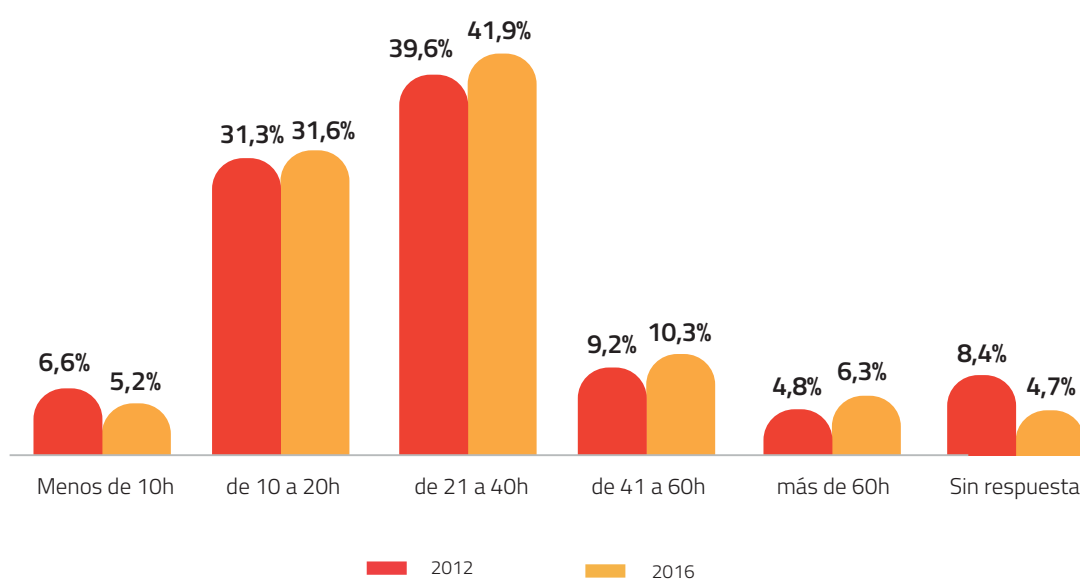


Gráfico 23. Porcentaje de bibliotecas por intervalo de horas de apertura, 2012 y 2016.

3.3. ¿Cómo evoluciona el préstamo de la colección?

Desde 2010 el servicio de préstamo ha comenzado a sufrir un descenso continuado en su uso. Si se comparan los datos de BPEC de 2016 con los de 2010, el resultado es un descenso del 18,8% en el número total de préstamos en las bibliotecas públicas. Este descenso viene provocado fundamentalmente por los préstamos de AVE, que en el conjunto de España es un 40,8% menor en 2016 respecto a 2010: las tres cuartas partes de los préstamos netos que se pierden en el periodo corresponden a audiovisuales y sonoros. En algunas regiones este descenso en el préstamo de AVE es aún mayor: en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia el descenso supera el 50%. Por el contrario, en Cantabria, Galicia y País Vasco el descenso registrado no supera el 25%. Es un fenómeno ya observado en trabajos anteriores y que había comenzado en la década anterior, que creemos que está provocado por el cambio en los hábitos de consumo cultural, que han sustituido los soportes físicos (discos...) por accesos en línea (Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2014).

Por su parte, el préstamo de libros se mantiene con una ligera tendencia al alza entre 2010 y 2013 (Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2014), pero empieza a bajar moderadamente a partir de 2014, hasta situarse en 2016 en un 7,4% menos que en 2010. Prácticamente en todas las comunidades autónomas se va produciendo ese ligero descenso del préstamo de libros, aunque las regiones donde el descenso es más acusado son Asturias (-22,0%), Castilla-La Mancha (20,5%), Navarra (16,3%) y Andalucía (15,4%), y menor en Galicia o Murcia, en las que la bajada se ha iniciado un poco más tarde.

Con la evolución del préstamo de estas dos clases de documentos, el peso porcentual de los libros es cada vez mayor en el conjunto del total de este servicio, alcanzando en 2016 una proporción del 70,5%, cuando en 2010 suponían el 61,9% de los documentos retirados por los usuarios.

El descenso en el préstamo de libros se puede interpretar como una reacción a la menor compra de novedades por parte de las bibliotecas. Aunque es tentador poder achacarlo al cambio en los hábitos de información y lectura de los usuarios y la población con el libro electrónico, no está claro que con los libros esté sucediendo lo mismo que con los AVE, pues los lectores siguen prefiriendo leer en papel, incluyendo los lectores de libro electrónico. Más bien, se podría pensar que el descenso en el gasto en bibliotecas está haciendo mella en los servicios, más aún teniendo en cuenta que el gasto en la adquisición de novedades literarias es una de las partidas que más ha sentido los efectos de la crisis.

En 2016 los españoles tomaron en préstamo una media de 1,06 documentos de las bibliotecas públicas, de los cuales la mayor parte fueron libros (0,75 préstamos por habitante) y AVE (0,27); el resto serían publicaciones periódicas y otros documentos. Es un valor muy bajo, que nos sitúa en la cola en el contexto de otros países de la Unión Europea (European Bureau of Library Information and Documentation Associations, 2015), donde la media de préstamos por habitante se sitúa en 4,4 por persona y año², tratándose además de una diferencia que se está incrementando.

² Este indicador se calcula con los datos recogidos por EBLIDA en 2012-2013, correspondientes a los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

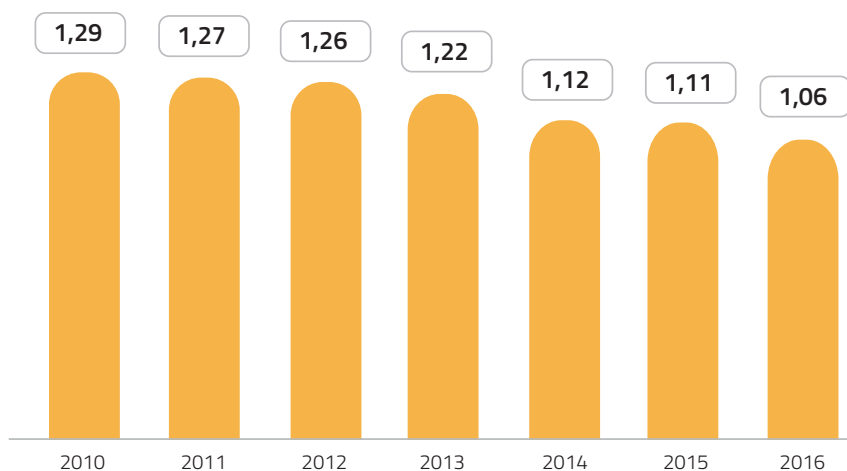


Gráfico 24. Préstamos de documentos por habitante. España, 2010-2016.

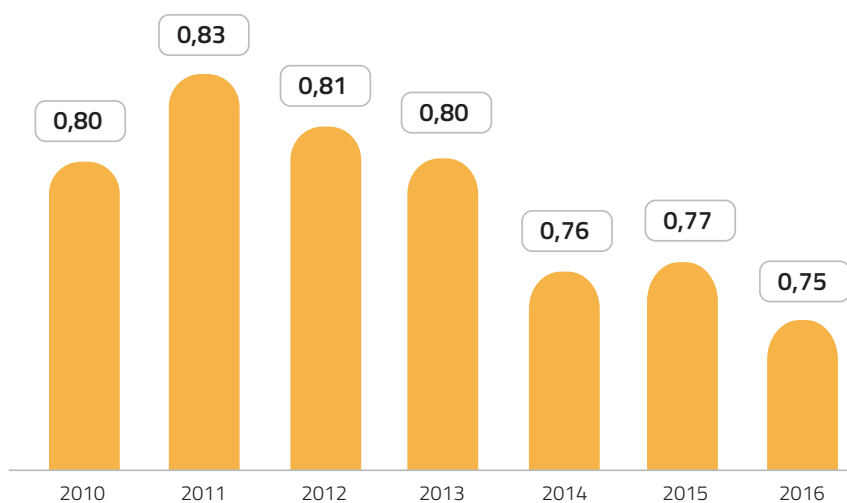


Gráfico 25. Préstamos de libros por habitante. España, 2010-2016.

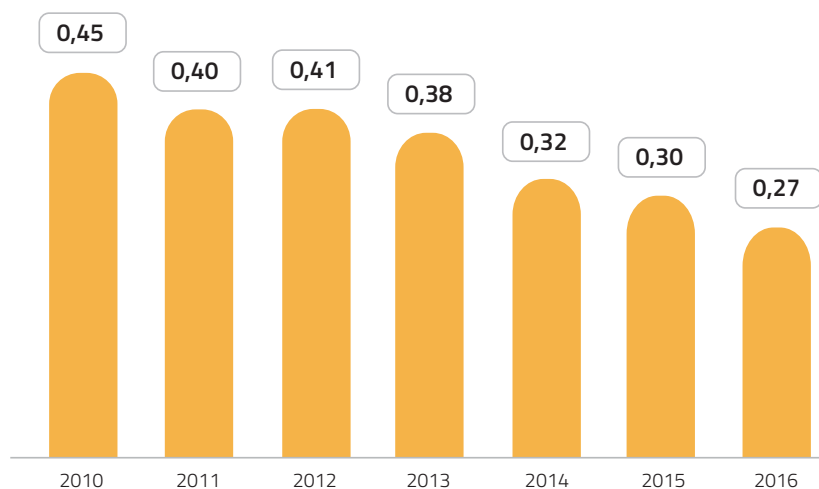


Gráfico 26. Préstamos de AVE por habitante. España, 2010-2016.

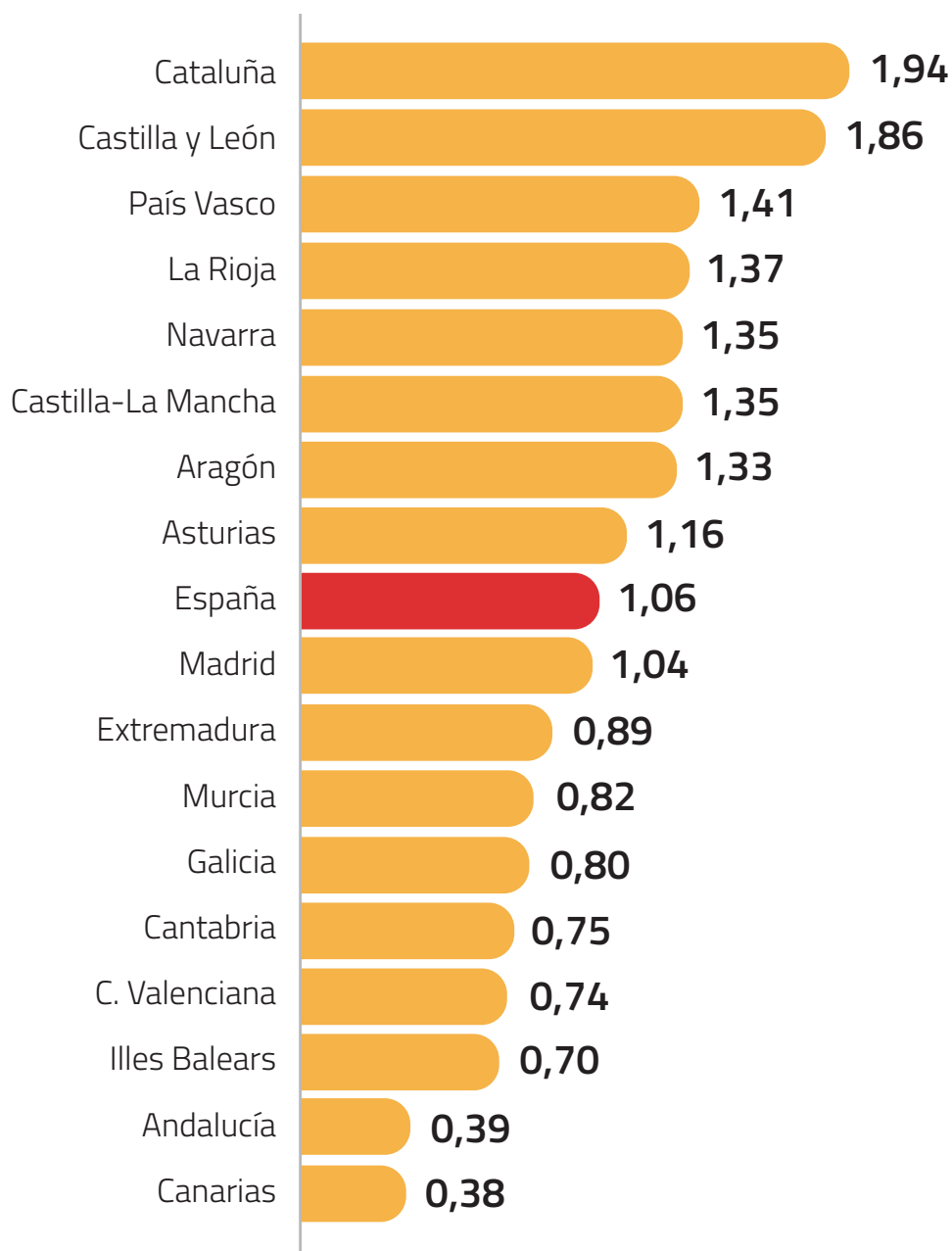


Gráfico 27. Préstamos de documentos por habitante, por comunidades autónomas. España, 2016.

Esta misma tendencia del préstamo queda constatada por la serie de datos del INE, que muestra un descenso del 7,5% en el préstamo de libros entre 2010 y 2016 en las bibliotecas públicas, suponiendo un cambio de tendencia que se documenta desde 2002.

Se trata de una dinámica que no es exclusiva de las bibliotecas públicas, pues en la misma situación de descenso del número de préstamos se encuentran las bibliotecas universitarias españolas, y de forma aún más acusada, con un descenso del 18,3% entre 2014 y 2016 según los indicadores que elabora el grupo de trabajo de estadística de REBIUN (2019).

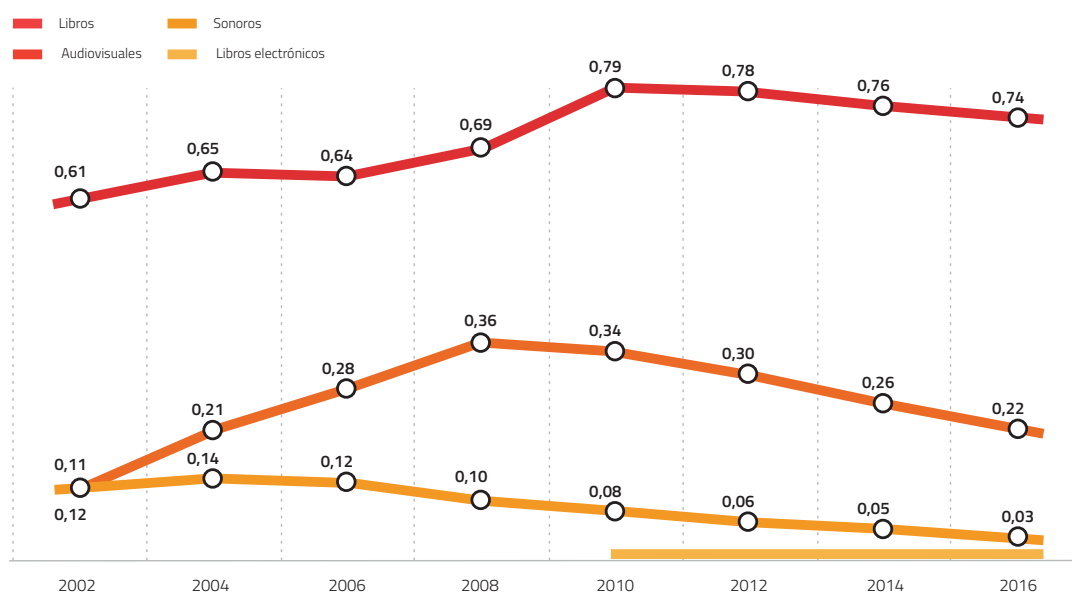


Gráfico 28. Evolución en los préstamos por habitante en bibliotecas públicas, 2002-2016. Fuente: INE.

Teniendo en cuenta que el principal motivo para acudir a una biblioteca es tomar o devolver libros en préstamo, según recogen los informes de *Hábitos de lectura...* (Conecta, 2018), parece lógico establecer una relación entre el descenso del préstamo y el descenso de las visitas.

A las cantidades sobre préstamo en bibliotecas públicas se podría sumar el préstamo de libros electrónicos, a través de eBiblio y eLiburutegia. En 2015, primer año efectivo de funcionamiento, se registraron en eBiblio 246.115 préstamos digitales (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2016), y en 2016 se llegó a 395.293 (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2017), con 45.227 usuarios distintos inscritos en esta plataforma. Como se puede apreciar en el gráfico, sumando los préstamos en la plataforma de Euskadi (Gobierno Vasco, 2017) supone una media de 8,49 préstamos de documentos electrónicos por cada mil habitantes en el conjunto de la población. Comparado con el número de préstamos de otros materiales supone solo una pequeña parte: ese mismo año se registraron 1.060 préstamos de documentos por cada 1.000 habitantes, 748 préstamos de libros por cada 1.000 habitantes y 269 préstamos de AVE por cada 1.000 habitantes.

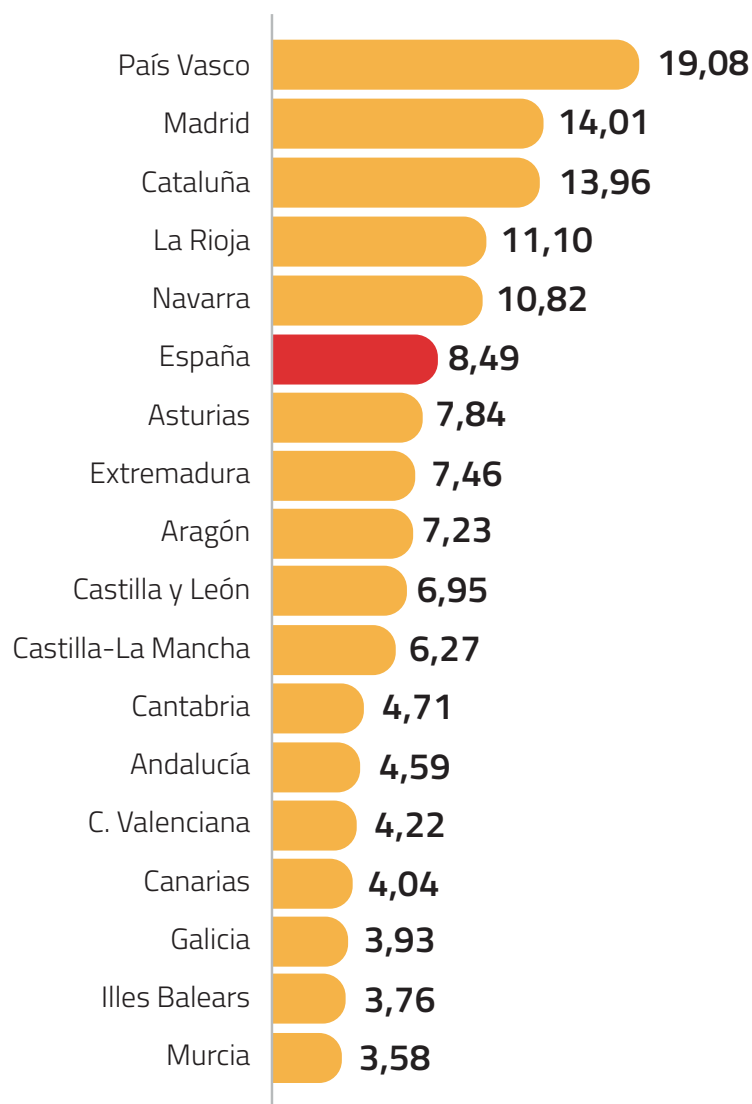


Gráfico 29. Número de préstamos de libros electrónicos por cada mil habitantes a través de las plataformas eBiblio y eLiburutegia en España, 2016.

3.4. ¿Qué otros servicios bibliotecarios ofrecen las bibliotecas?

Aunque el préstamo sigue siendo el servicio más destacado de las bibliotecas, cada vez cobran más importancia otros como la organización de actividades, si bien la información que proporciona BPEC es escasa tanto sobre su tipología (no se diferencia si son culturales, educativas, de ocio, tecnológicas,

conmemorativas, de divulgación científica, debate político y ciudadano o acción social). Tampoco se puede saber mucho sobre el préstamo de dispositivos (portátiles, *e-readers*), las sesiones de alfabetización informacional, o como ya comentamos la conectividad wifi, la disponibilidad de página web y catálogo online, de los que hay una respuesta insuficiente de las bibliotecas. Por supuesto, no tenemos datos globales de la presencia y servicio de las bibliotecas públicas en redes sociales, los servicios de información (salvo la excepción parcial de *Pregunte*, el servicio cooperativo de referencia de las bibliotecas españolas) prestados tanto presencialmente como a través de correo electrónico, servicios de chat o canales tipo WhatsApp.

El número de actividades celebradas en 2016 por las bibliotecas públicas según los datos fue de 225.644, y a ellas asistieron una media de 20,5 personas, si bien no hay una mínima constancia sobre su exactitud por numerosas inconsistencias: en algunas comunidades autónomas la media de asistentes por actividad es excesivamente baja (1,1 en Valencia, 3,3 en Andalucía) o demasiado alta (151,9 en Canarias, 827,2 en Melilla, 70,3 en Galicia).

A pesar de las dudas —por las cuales no merece la pena detallar los resultados generales o por autonomías—, estudios anteriores han constatado un incremento del esfuerzo en la dinamización de los servicios (Merlo-Vega y Chu, 2015; Gómez-Hernández, 2013), mediante herramientas como la colaboración de usuarios y asociaciones del tercer sector o el voluntariado, si bien el sector profesional de actividades culturales perdió en buena parte este tipo de empleo.

4.

informe fesabid

GASTOS Y FINANCIACIÓN

4.1. Evolución del gasto

Los presupuestos, tanto en las cantidades asignadas como en su forma de distribución, reflejan mejor que ningún otro dato la voluntad política respecto de un servicio como las bibliotecas públicas cuyos recursos dependen de la financiación pública casi en su totalidad. Por ello, comprender la situación del sistema español de bibliotecas obliga a un examen más detenido de la evolución presupuestaria, tanto en términos generales como entre las distintas administraciones concernidas y los distintos territorios que integran España.

Las estadísticas de BPEC registran los gastos corrientes y de inversiones, desglosando en cada caso el tipo de gasto y el tipo de administración que lo financia. Para prestar el servicio al que están destinadas, las bibliotecas disponen cada año de dotaciones presupuestarias con que afrontar los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. Son los gastos corrientes, tradicionalmente desglosados en tres capítulos: personal, adquisiciones documentales y otros gastos.

En 2016, los gastos de las bibliotecas públicas totalizaron 463,2 millones de euros, apenas un 0,9% por encima de los registrados seis años antes.

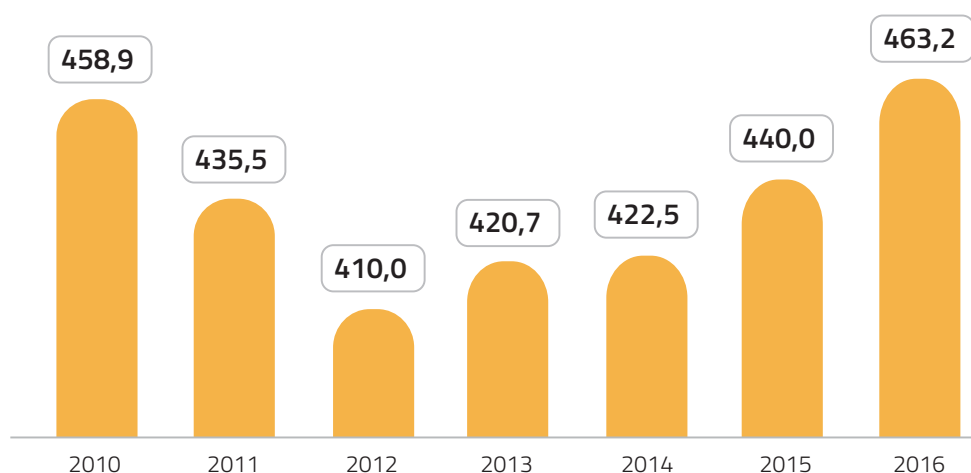


Gráfico 30. Evolución del gasto corriente total en bibliotecas públicas en millones de euros, 2010-2016.

Se produjo un fuerte descenso en 2011 y 2012 (de un 11% con respecto a 2010), que comienza a recuperarse tímidamente a partir de 2013 y sobre todo en el último año del periodo, aunque apenas se llegue a superar el nivel de gasto de 2010.

Esta evolución se refleja igualmente en el nivel de gasto corriente por habitante, que en 2016 se situó en casi 10 euros anuales por habitante, tras haber perdido un euro en los primeros años del periodo estudiado.

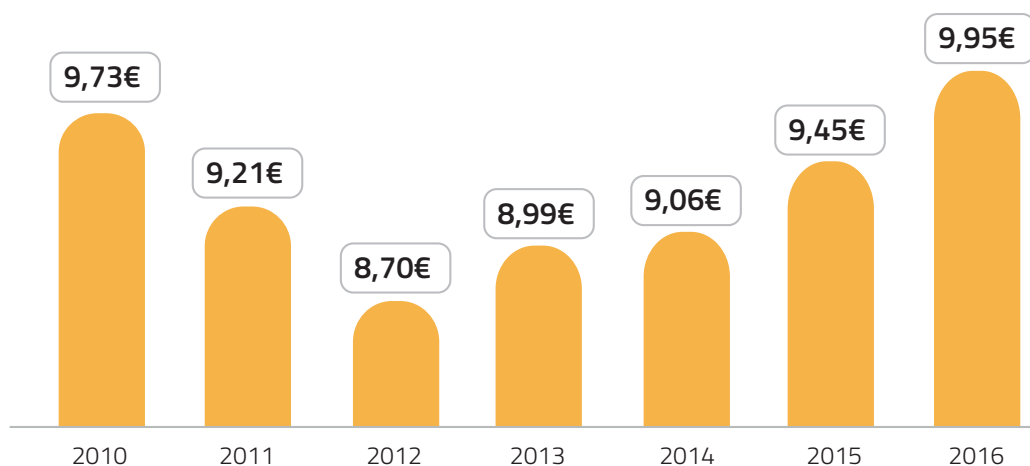


Gráfico 31. Gasto corriente por habitante, 2010-2016.

Sin duda, el estancamiento demográfico en España (que en 2016 había perdido casi 600.000 habitantes con respecto a 2010) ha favorecido esta mínima mejora al final del periodo en este y otros indicadores que ponen en relación bibliotecas y habitantes.

Por razones parecidas —el descenso del número bibliotecas en 251 durante estos años— también mejora ligeramente el gasto medio por biblioteca, que pasa de 93.970 euros en 2010 a 99.988 euros en 2016 (tras haber bajado hasta 86.962 euros en 2012). Ahora bien, si el descenso del número de bibliotecas se ha visto compensado con el aumento de la superficie de las mismas, ello no se ha traducido precisamente en una mejora proporcional en las dotaciones económicas, sino que se ha reducido gasto en relación con la superficie: en 2010, se registró un gasto medio de 328 euros por metro cuadrado, indicador que desciende en los años siguientes hasta situarse en 273 euros en 2014 y recuperarse ligeramente en 2015 y 2016 (286 euros /m²), pero sin llegar al valor inicial.

En definitiva, los datos globales del gasto en bibliotecas públicas reflejan un impacto moderado de los recortes económicos aplicados como consecuencia de la crisis económica. Pero a la vez ponen en evidencia que la dinámica de crecimiento de los recursos financieros en la primera década del siglo XXI (especialmente hasta 2008, con un crecimiento medio anual cercano al 10%) se ha visto tajantemente invertida en los primeros años de la década actual (entre 2010 y 2012 se acumula un descenso del -10% en el gasto de BP), sin que en 2016 se hayan recuperado las dotaciones. (Hernández-Sánchez, 2008 y Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2012).

Desde cualquiera de las perspectivas que hagan relación al gasto y financiación de las bibliotecas públicas, las diferencias entre las distintas comunidades autónomas eran y siguen siendo son enormes.

	2010	2016
Andalucía	5,5 €	5,8 €
Aragón	10,6 €	9,9 €
Canarias	5,1 €	5,2 €
Cantabria	7,0 €	7,3 €
Castilla y León	10,8 €	12,1 €
Castilla-La Mancha	16,1 €	13,8 €
Cataluña	15,1 €	15,5 €
Madrid	10,7 €	10,4 €
Navarra	9,2 €	9,3 €
C. Valenciana	6,8 €	6,8 €
Extremadura	9,6 €	9,5 €
Galicia	8,4 €	8,7 €
Illes Balears	7,2 €	5,7 €
La Rioja	9,9 €	10,4 €
País Vasco	14,3 €	18,3 €
Asturias	8,2 €	7,7 €
Murcia	7,8 €	7,5 €
España	9,7 €	9,9 €

Tabla 4. Gasto corriente por habitante por comunidades autónomas, 2010 y 2016.

En términos generales, estas diferencias muestran una tendencia a incrementarse a lo largo del periodo, sin que varíen especialmente las comunidades con mejores datos (País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha...) y las que registran mayores carencias presupuestarias (Canarias, Baleares, Andalucía...). El gasto total por habitante, en País Vasco (18,3 euros/habitante en 2016) o en Cataluña (15,5 euros) es el triple que el registrado en Canarias, Baleares o Andalucía. Especialmente llamativo es el descenso de recursos en Castilla-La Mancha, que en 2010 registraba el mayor índice de gasto en bibliotecas públicas por habitante (16,1 euros), y se mantiene no obstante entre las Comunidades con mejor financiación, a pesar de haberse reducido a 13,8 euros en 2016.

No todos los tipos de gastos han evolucionado de la misma forma. De la clasificación tradicional por tipo de gasto (personal, adquisiciones y otros), el personal ha incrementado su peso proporcional, las adquisiciones se han reducido significativamente, mientras que los otros gastos mantienen su importancia con una ligera tendencia a la baja.

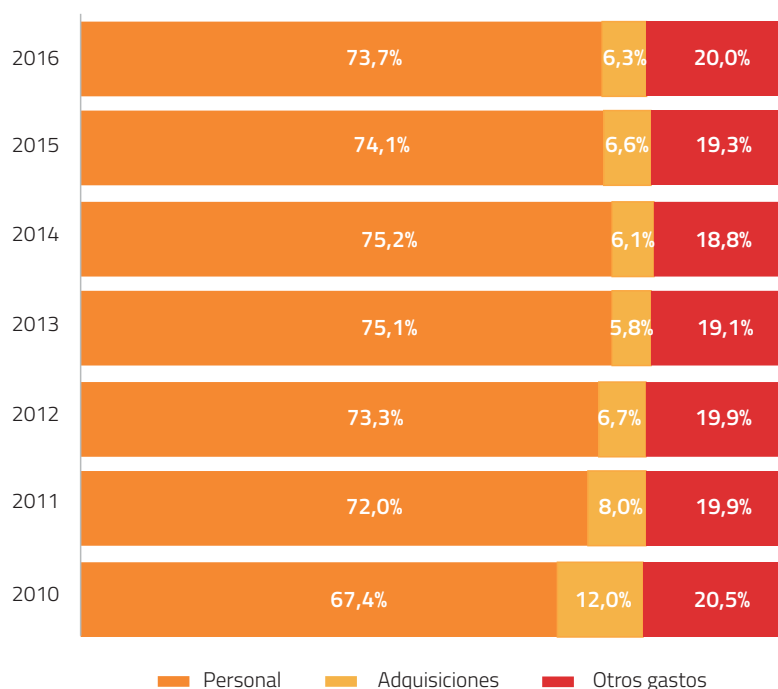


Gráfico 32. Gasto corriente en bibliotecas por grandes capítulos presupuestarios, 2010-2016.

Los gastos de personal, en términos absolutos, no parecen haberse visto afectados por los recortes económicos. Descendieron ligeramente en 2012, pero en 2016 habían crecido en un 10,3% con respecto a 2010, en consonancia con el ligero aumento del número de empleados ETC y del coste salarial medio registrado. Pero si en el gasto de personal apenas se notan los recortes, desde la perspectiva de toda España, sí son significativos en una perspectiva regional, pues se han reducido en comunidades como las Islas Baleares y Castilla-La Mancha, mientras que, sin embargo, en País Vasco, Cataluña y Andalucía crecen por encima del 20% a lo largo del periodo.

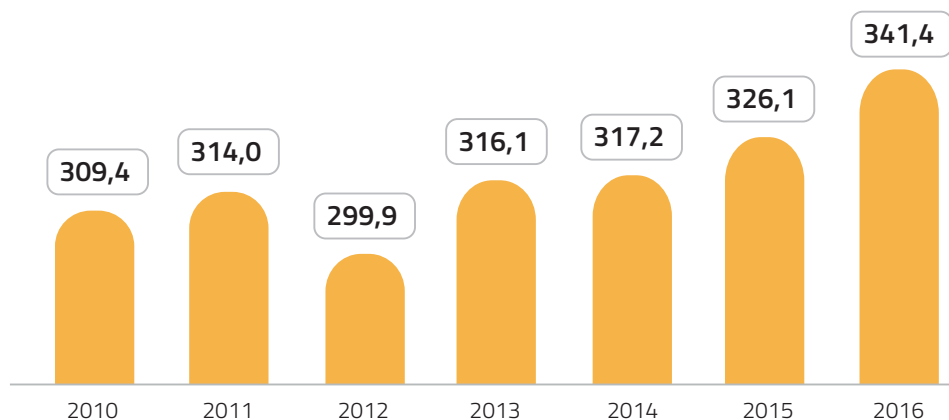


Gráfico 33. Gasto de personal en bibliotecas públicas en España, 2010-2016, en millones de euros.

Resulta significativo el crecimiento relativo que, proporcionalmente sobre el conjunto de los gastos, han ido adquiriendo los costes de personal. En efecto, a principios del periodo analizado, el gasto de personal representaba poco más de las dos terceras partes del gasto total de las bibliotecas (67,4%), proporción que se ha ido incrementando hasta situarse en torno a las tres cuartas partes del total (75,1% en 2013 y 73,7% en 2016), incremento que se debe no tanto al que registran los propios gastos de personal, sino sobre todo al descenso de las otras partidas (adquisiciones y otros gastos).

Podría decirse que, como resultado del periodo, en 2016 se ha asentado una distribución bastante desequilibrada de las dotaciones presupuestarias de las bibliotecas públicas, que resulta especialmente abultada en Andalucía (83,8% en personal), Canarias (84,4%) o Comunidad Valenciana (80,0%); únicamente Cataluña (64,1%), Navarra (60,8%), La Rioja (59,6%) o el País Vasco (68,1%) mantienen proporciones inferiores o similares a los dos tercios destinados a personal³. En 2016, las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de gasto destinado a personal son también las que registran un menor índice de gasto por habitante; es decir, no solamente apenas disponen de recursos económicos para adquisiciones y otros gastos, sino que, en su partida mayoritaria, el personal, están también por debajo de la media. A la inversa, hay una clara correspondencia entre porcentajes de gasto en personal más inferiores y los indicadores más positivos de gasto total por habitante.

El gasto en adquisiciones documentales ha sido el que más se ha visto afectado por la crisis económica pudiendo hablarse de un desplome. BPEC muestra un acusado descenso, que se viene arrastrando de forma continuada desde 2010. Desde ese año, este gasto se ha reducido un 47,7% entre 2010 y 2016. En números absolutos se pasó de 55,5 millones de euros en 2010 hasta 24,4 millones en 2013, situándose en 29,1 millones en 2016, casi la mitad de lo gastado en adquisiciones durante 2010.

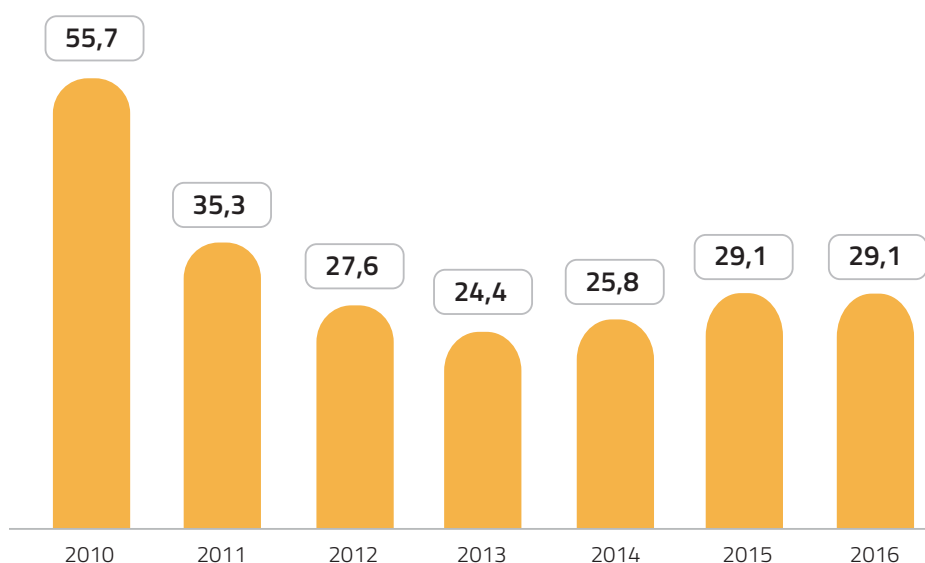


Gráfico 34. Gasto en adquisiciones bibliográficas en bibliotecas públicas en España, 2010-2016, en millones de euros.

³ A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las bibliotecas universitarias, en las que el gasto del personal es sólo el 49,9% del presupuesto que tienen disponible, facilitando una media que considerando todos los tipos de bibliotecas está en el 61,4% para costes de personal (INE, 2018).

El recorte más brusco se produjo en los primeros años del periodo estudiado, como consecuencia de la interrupción de los convenios de colaboración entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas para «la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas», suscritos entre 2006 y 2010.

	Aportación MCU		Aportación CCAA		Total
	euros	%	euros	%	
2006	9.600.000€	47,0%	10.812.315€	53,0%	20.412.315€
2007	17.377.928€	48,5%	18.466.784€	51,5%	35.844.712€
2008	18.561.793€	47,5%	20.487.560€	52,5%	39.049.353€
2009	17.590.020€	48,6%	18.612.568€	51,4%	36.202.588€
2010	10.020.227€	49,3%	10.296.793€	50,7%	20.317.020€
Total 2006-2010	73.149.968€	48,2%	78.676.021€	51,8%	151.825.989€

Tabla 5. Aportaciones del Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas (CCAA) para adquisiciones bibliográficas, 2006-2010.
Fuente: propia a partir de las resoluciones de concesión.

Esto significa que en 2016 por cada ciudadano se gastaron 0,63 euros para nuevos documentos en las bibliotecas públicas, un dato que nos retrocede a niveles inferiores a los de 2001, cuando se registraron 0,67 euros (Hernández-Sánchez, 2008). Aunque desde 2014 y 2015 parece haber comenzado un ligero repunte, de momento nada parece indicar una recuperación de los niveles de gasto anteriores a la crisis.

Se trata de un descenso generalizado que afecta a todas las comunidades autónomas, aunque algunas con mayor crudeza, como en el caso de Andalucía, con un descenso del 74,9% en el gasto de adquisiciones entre 2010 y 2016, Castilla-La Mancha (70,0%), Extremadura (66,3%), Canarias (65,1%), Madrid (63,1%). A diferencia del resto de las regiones, donde el gasto en adquisiciones por habitante desciende, en el País Vasco se mantiene aproximadamente igual, con un ligero ascenso del 3,4%.

También decrece a lo largo del periodo el capítulo de otros gastos (94 millones de euros en 2010), descenso que continúa hasta 2014 (79,5 millones de euros) y que se queda en un saldo negativo de 1,3 millones de euros menos en 2016 con respecto a 2010 (92,7 millones de euros).

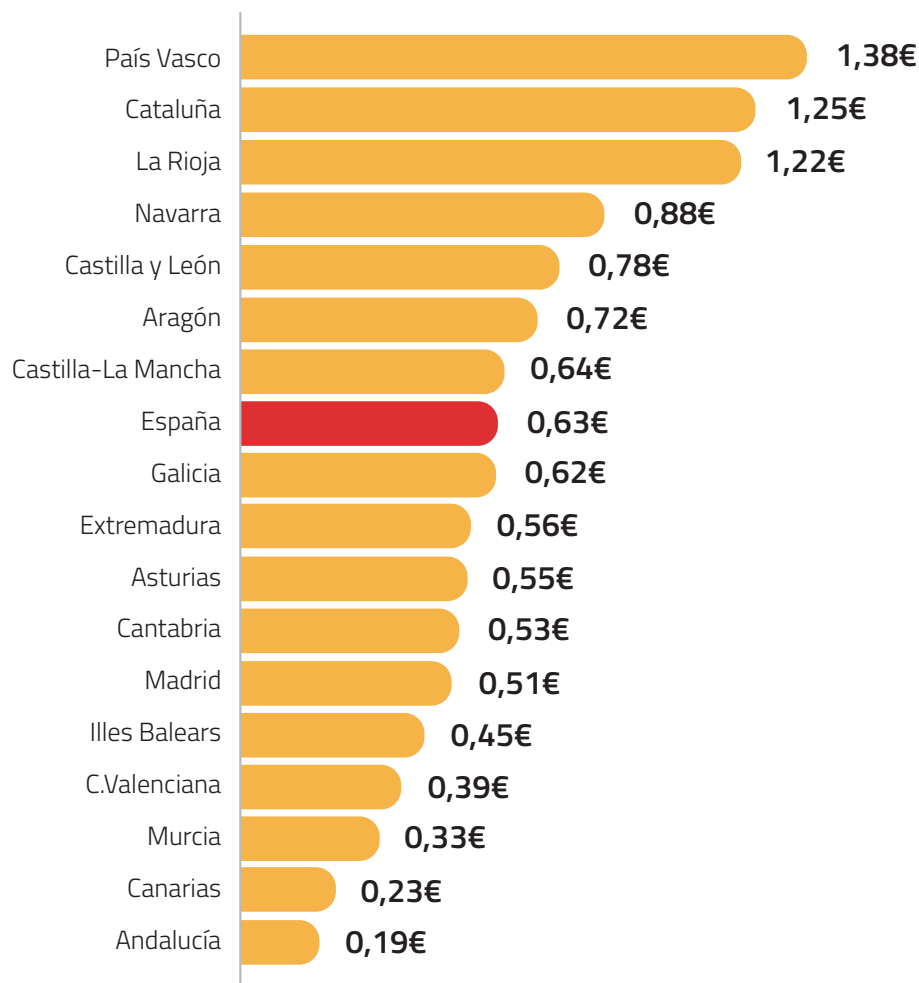


Gráfico 35. Gasto en adquisiciones por habitante, por comunidades autónomas, 2016.

El capítulo de otros gastos se distribuye en cuatro subcapítulos con evolución y significación distinta:

- **Mantenimiento de la colección:** tiene poca relevancia, representa en 2016 el 1,0% de los Otros Gastos (el 1,4% en 2010), si bien tiene un saldo negativo en el periodo de -27,8%.
- **Instalaciones:** su importe supone la mitad del capítulo Otros Gastos (49,4% en 2016); a pesar de algunos altibajos durante el periodo, arroja un crecimiento acumulado del 13,6% en estos años (como no podría ser de otra forma, dada la naturaleza del tipo de gasto).
- **Automatización:** tiene así mismo poca entidad, y se ha incrementado de representar en 2010 el 1,2% de Otros gastos, a un 2,0% en 2016.
- **Otros:** un epígrafe indefinido, a pesar de ser el otro gran subcapítulo del epígrafe: representaba más de la mitad en 2010 (54,5%), con 51,3 millones de euros, pero desciende en los años siguientes (17,1 millones menos en 2014) mejorando en 2015 y 2016, si bien termina el periodo con un saldo negativo de más de 7 millones y representando el 47,6% del capítulo.

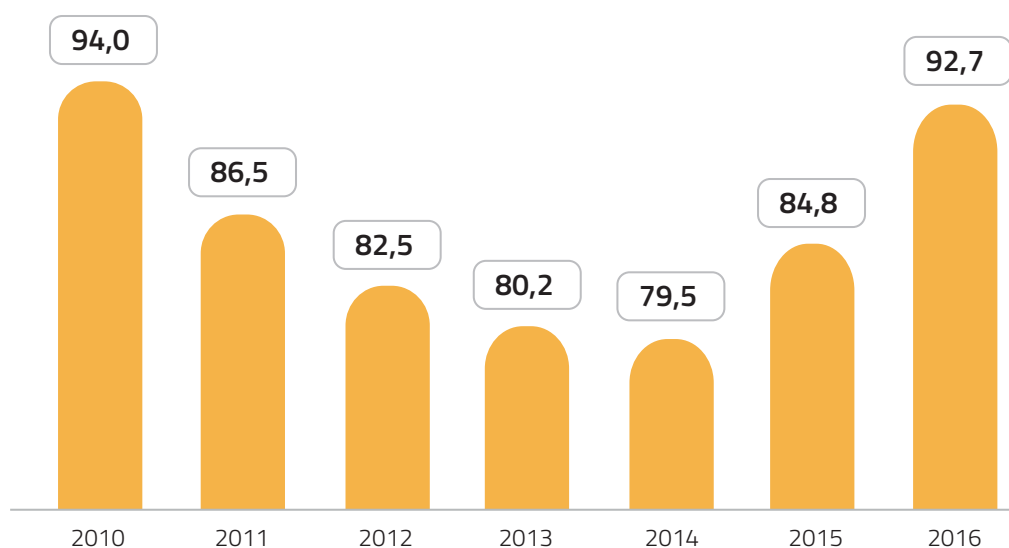


Gráfico 36. Otros gastos en bibliotecas públicas en España en millones de euros, 2010-2016.

En definitiva, se mantienen moderadamente al alza los gastos de instalaciones (un gasto poco «elegible» y sujeto a los precios de mercado), pero sufren un significativo descenso los recursos destinados al subcapítulo 'Otros', con el que se financian proyectos y actividades desarrollados por las bibliotecas.

4.2. La financiación de las bibliotecas públicas: el gasto por titularidad

Como servicio público, las bibliotecas públicas están financiadas casi en su totalidad por la Administración. La titularidad del gasto se corresponde mayoritariamente con la titularidad de la propia biblioteca, a excepción de las 53 Bibliotecas Públicas del Estado (en adelante, BPE) (titularidad estatal y gestión de la comunidad autónoma respectiva, más una diputación y un consell). Existen, por último, contadas administraciones locales (diputaciones) o autonómicas que aportan recursos sin ostentar la titularidad de las bibliotecas.

Los 463,2 millones de euros que sumaron los gastos de las bibliotecas públicas en 2016 fueron financiados en un 78,3% por la Administración local; las comunidades autónomas aportaron el 20,8%; mientras que el 0,9% restantes correspondió a la Administración General del Estado (AE), entidades privadas y otros.

	2010	2016
A. Local	71,7%	78,3%
A. Autonómica	24,9%	20,8%
A. Estado	2,8%	0,2%
Privada y otros	0,6%	0,8%
Gasto (mill. euros)	458,9	463,2

Tabla 6. Financiación del gasto por Administraciones, 2010 y 2016.

De los diez euros (9,95 euros) por habitante que costaron las bibliotecas públicas en 2016, casi ocho (7,79 euros) fueron financiados por la Administración local; dos euros (2,06 euros) procedían de las comunidades autónomas y unos diez céntimos fueron aportados en conjunto por la Administración General del Estado, entidades privadas u otras fuentes.

El papel de la Administración local en la financiación de las bibliotecas públicas ha ido creciendo a lo largo del periodo: si en 2010 representaba en torno al 70% del total (71,7%), ha pasado a situarse cerca del 80% (78,3%). Mientras otras administraciones han reducido su aportación, los recursos de la Administración local para las bibliotecas se han incrementado en un 10,3% en 2016 con respecto a 2010 (tras ligeros descensos en 2012 y 2013).

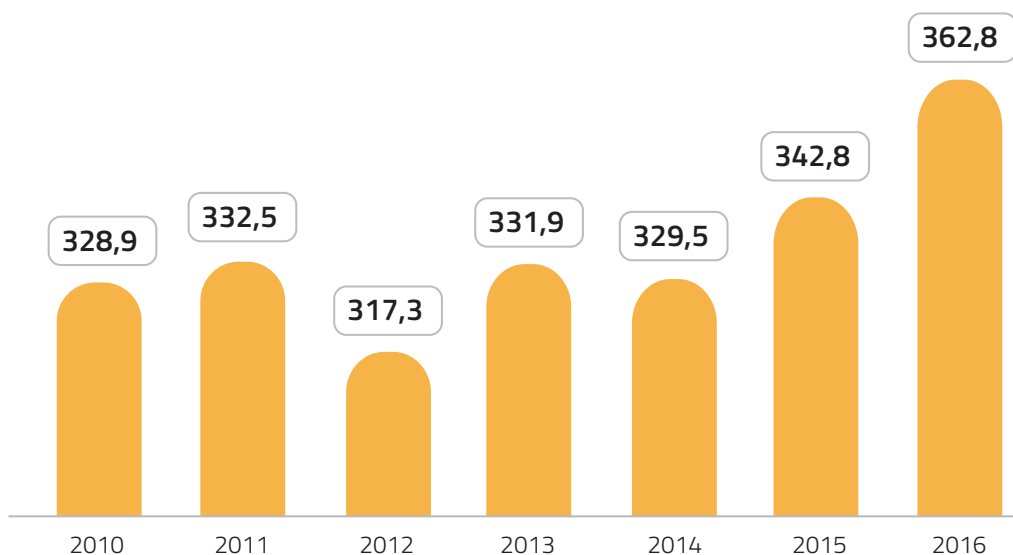


Gráfico 37. Financiación de la Administración local en millones de euros, 2010 a 2016.

La mejora global en la financiación por parte de la Administración local refleja el compromiso que en primera instancia tienen estas administraciones en la prestación del servicio de biblioteca pública. Y ha permitido absorber, en parte, los recortes económicos aplicados por las comunidades autónomas y la Administración del Estado a los presupuestos bibliotecarios, de manera que en 2016 se han recuperado los niveles económicos de 2010, tras los fuertes descensos de los primeros años del periodo. Este aumento se refleja en el gasto por habitante financiado por ayuntamientos y diputaciones, que de 6,97 euros en 2010 pasa a 7,79 euros en 2016 para el conjunto de España.

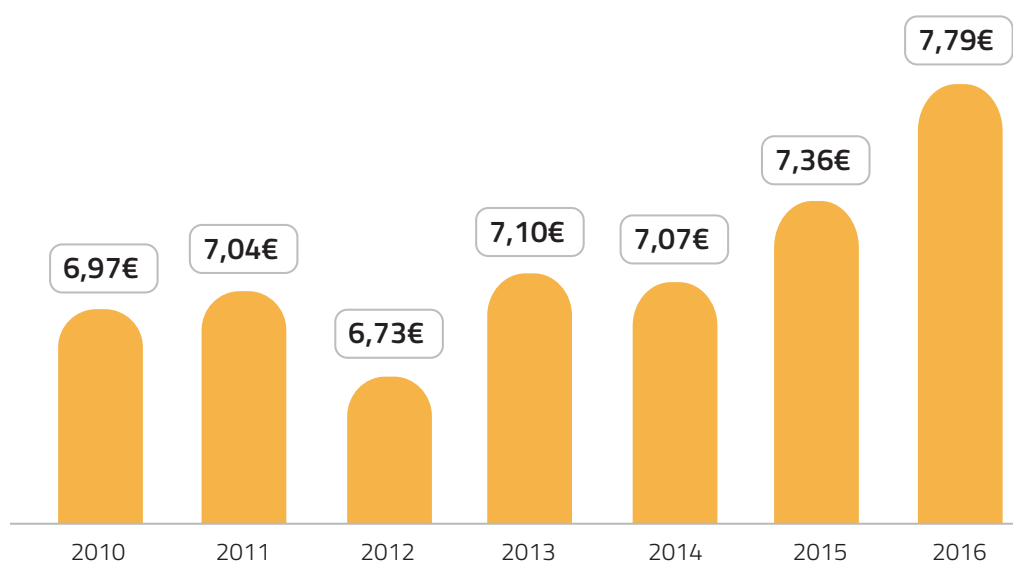


Gráfico 38. Financiación de la Administración local por habitante, 2010 a 2016.

Pero la aportación económica de la Administración local precisa un análisis más detallado. En primer lugar, porque este crecimiento no ha sido homogéneo: la evolución ha sido negativa en algunas comunidades (en especial en Islas Baleares, Asturias y Castilla-La Mancha), mientras que los ayuntamientos cuya aportación ha sido progresivamente más positiva pertenecen a La Rioja, Andalucía, País Vasco y Cataluña⁴.

Por otra parte, dentro de la Administración local se incluyen no solamente los ayuntamientos, sino también otras instituciones de ámbito supramunicipal: las diputaciones provinciales en las comunidades con dos o más provincias (41 diputaciones en nueve autonomías) y los consejos y cabildos insulares en Baleares y Canarias. Globalmente, la financiación de las diputaciones supuso la décima parte (9,6%) de los gastos de las bibliotecas en 2016. Esta significativa aportación podría llamar a engaño si no se tiene en cuenta que tres cuartas partes de la misma corresponden a una sola diputación, la de Barcelona (que constituye un modelo singular de apoyo y sostenimiento de las bibliotecas públicas municipales de su provincia, con una financiación de 6,04 euros por habitante en 2016).

En otras provincias, las diputaciones se limitan a modestas aportaciones destinadas a las bibliotecas de su territorio o más comúnmente al funcionamiento de bibliotecas o bibliobuses de las que son titulares o responsables de su gestión (son los casos de las provincias del País Vasco y Castilla y León). Y en más de la mitad de las diputaciones existentes, las aportaciones financieras son poco más que simbólicas, a pesar de la obligación legal de estas instituciones de apoyar a los ayuntamientos en la prestación de los servicios básicos que tienen asignados.

La financiación de las comunidades autónomas, por el contrario, ha disminuido durante estos años, aportando en su conjunto 18,3 millones de euros menos en 2016 que en 2010. Ha pasado de representar la cuarta parte (24,9%) del total de la financiación de las bibliotecas públicas en 2010, a representar una quinta parte (20,8%) en 2016.

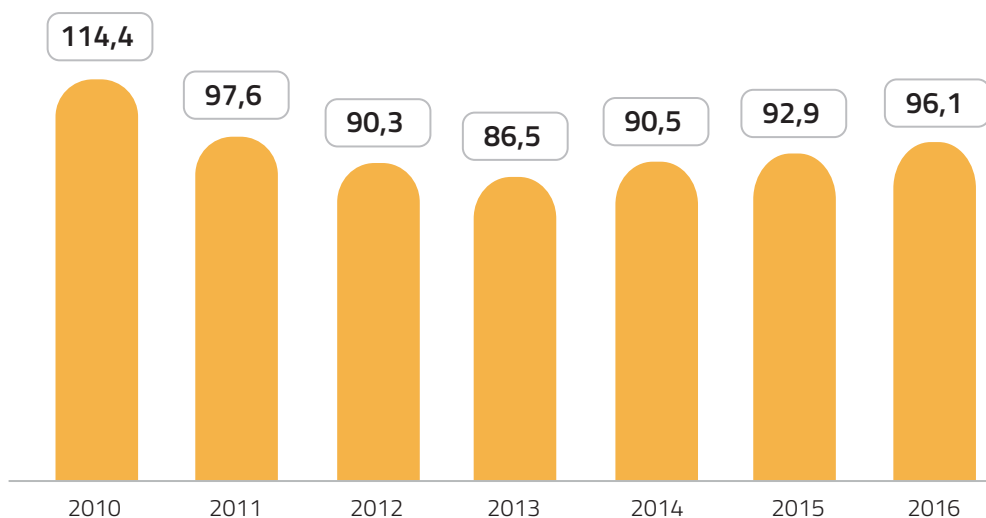


Gráfico 39. Financiación de las Administraciones Autonómicas en millones euros, 2010 a 2016.

⁴ La comparación interterritorial del nivel de financiación de la Administración local entre las distintas comunidades autónomas, muestra unas diferencias especialmente abultadas si se pone en relación con la población de las mismas. La financiación por habitante de la Administración local registra valores muy heterogéneos en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcan los municipios.

El destino de las aportaciones presupuestarias de los gobiernos autonómicos tiene básicamente dos modalidades:

- Financiar los gastos generados por las bibliotecas de las que son titulares o cuya gestión tienen transferida, como ocurre con las BPE (en las capitales de provincia, salvo las conocidas excepciones de Barcelona, Bilbao, Pamplona y San Sebastián que no tienen, y Gijón, Mahón, Mérida, Orihuela y Santiago en las que hay BPE sin ser capitales provinciales) y de los bibliobuses en autonomías como Madrid, Castilla-La Mancha o Murcia.
- Apoyar el sostenimiento de las bibliotecas públicas municipales y de los servicios de red del sistema autonómico.

Pues bien, de los 88,7 millones de euros financiados por las comunidades en 2016, en su mayor parte, 63,5 millones (el 71,5%), estuvieron destinados a las BPE (Ministerio de Cultura y Deporte, 2019). Por el contrario, destinaron menos del 30% de sus aportaciones a apoyar el funcionamiento de las otras bibliotecas públicas de sus territorios. Globalmente, la financiación autonómica a otras bibliotecas distintas a las BPE pasa de ser de 45,6 millones de euros en 2010, a 29,8 millones en 2011 y sigue descendiendo en los años siguientes (27,8 millones en 2016). En este panorama hay una excepción significativa, la Comunidad Foral de Navarra, donde el Gobierno autonómico financia dos terceras partes del gasto de las bibliotecas públicas.

Al igual que ocurre con la financiación de la Administración local, las diferencias territoriales en la aportación de los gobiernos autonómico son, en términos relativos, bastante grandes.

Comunidad autónoma	Gasto total	A. local	A. autonómica	A. Estado y otros
País Vasco	18,27 €	16,68 €	0,71 €	0,88 €
Cataluña	15,53 €	14,64 €	0,88 €	0,01 €
Castilla-La Mancha	13,77 €	9,83 €	3,86 €	0,07 €
Castilla y León	12,13 €	6,57 €	5,49 €	0,07 €
Madrid	10,42 €	7,35 €	3,06 €	0,02 €
La Rioja	10,40 €	4,60 €	5,71 €	0,10 €
España	9,95 €	7,79 €	2,06 €	0,10 €
Aragón	9,94 €	7,28 €	2,65 €	0,01 €
Extremadura	9,48 €	5,61 €	3,85 €	0,02 €
Navarra	9,35 €	2,88 €	6,17 €	0,31 €
Galicia	8,66 €	6,23 €	2,28 €	0,15 €
Asturias	7,67 €	5,53 €	2,12 €	0,02 €
Murcia	7,45 €	5,33 €	2,10 €	0,02 €
Cantabria	7,32 €	4,78 €	2,53 €	0,00 €
C. Valenciana	6,76 €	5,84 €	0,84 €	0,08 €
Andalucía	5,82 €	4,68 €	1,12 €	0,02 €
Illes Balears	5,70 €	4,54 €	1,16 €	0,01 €
Canarias	5,23 €	3,16 €	1,84 €	0,24 €

Tabla 7. Gasto y financiación por habitante, total y por Administraciones, 2016 (ordenada por la columna de Gasto total).

No en todos los casos hay un bajo nivel de financiación de la Administración local, esta se ve compensada por un índice elevado de financiación de los gobiernos autónomos. Un análisis superficial de la tabla anterior pone en evidencia la inexistencia de modelos de financiación inter-administrativa que puedan ser sistematizables. Más bien podrían identificarse tantos modelos como comunidades autónomas, algo que podría extenderse a distintos modelos provinciales dentro de una misma autonomía.

Hay, sin embargo, algunas constantes que pueden ponerse de relieve. En primer lugar, las comunidades cuyas bibliotecas registran un mayor índice de gasto por habitante, son también las que disponen de un mayor índice de financiación de la Administración Local. En los casos de País Vasco y Cataluña, coincide además aportaciones significativas de las diputaciones junto a los ayuntamientos y con los índices más bajos de financiación relativa de las comunidades autónomas. Por el contrario, los índices más reducidos de gasto por habitante en bibliotecas, aparecen asociados a índices bajos de financiación de la Administración Local y también de la Administración autonómica. Puede detectarse cierto nivel de correspondencia entre niveles de financiación (y gasto) y niveles de renta y PIB, aunque una explicación detallada exigiría tener en cuenta también diferencias demográficas y de población, la tradición bibliotecaria de algunas ciudades y regiones y la adopción o no de políticas públicas de desarrollo bibliotecario en etapas anteriores.

El papel de la Administración del Estado en la financiación de las bibliotecas públicas es irrelevante, pues representa un porcentaje inferior al 0,2% del total (si bien en 2010-2011 había sido más alto). Las aportaciones privadas o de otras fuentes son también poco significativas en su conjunto, ascendieron a 3,6 millones de euros en 2016 (2,6 en 2010) representando un 0,8% del total (0,6% en 2010).

En la financiación de la Administración del Estado conviene reseñar que en el periodo analizado se ha producido un recorte importante: en 2010, ascendió a 13 millones de euros; bajó en 2011 a 3,3 millones y desde 2012 fluctúa por debajo (y bastante por debajo) de 1 millón de euros. La explicación de una caída tan brusca, tal como se indicaba anteriormente, se encuentra en la finalización de los convenios entre el Ministerio y las comunidades para dotaciones bibliográficas.

Se trató de un plan extraordinario de dotación bibliográfica, incorporado en el Plan de Fomento de la Lectura 2005-2006, y que comienza a desarrollarse en 2006. Entre 2006 y 2010, se puede constatar —revisando las resoluciones de concesión publicadas en el Boletín Oficial del Estado— que estos convenios aportaron más de 150 millones a los presupuestos para las colecciones de las bibliotecas públicas, que se financiaron entre la Administración del Estado (alrededor de un 48%) y las comunidades (en torno al 52%).

En 2010, las aportaciones de estos convenios ascendieron a 20,3 millones de euros (el 36,6% del total de gastos en adquisiciones, 55,5 millones). En 2011, los convenios desaparecen (alguno es prorrogado para su finalización) y el presupuesto para adquisiciones desciende precisamente en 20,5 millones de euros (el descenso continúa aún en los años siguientes y solo se detiene en 2015-2016).

La desaparición de estos convenios produce un brusco descenso en los gastos destinados a las adquisiciones para mantener y desarrollar las colecciones de las bibliotecas públicas, del que no se han recuperado a día de hoy (desde 2012 se han quedado en la mitad que fueron en 2010). Y también explica que la financiación de la Administración del Estado se reduzca de 2011 en adelante a una aportación poco más que testimonial, a la vez que pone así mismo en evidencia el descenso significativo de la financiación de las comunidades autónomas, especialmente en la destinada al funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales.

4.3. Los gastos de inversión por titularidad y clase de gasto

Al contrario que los gastos corrientes, que se ejecutan todos los años para la prestación del servicio, los gastos de inversiones se presupuestan para el periodo concreto que dure la ejecución del proyecto de una nueva biblioteca (o la remodelación profunda de una ya existente). Así pues, los gastos de inversión deben analizarse por periodos, ya que responden a proyectos plurianuales para la dotación o modernización de nuevas infraestructuras bibliotecarias (solares, edificaciones, mobiliario y equipamientos).

En el periodo de 2012-2016, los gastos de inversión ascendieron a 257,2 millones de euros, a una media anual de 51,4 millones. Lo cierto es que el nivel de inversiones se mantiene hasta 2015 con ligeras variaciones anuales (la evolución marca un máximo en 2014, con 69,3 millones de euros), pero desciende bruscamente en 2016, cuando se registran 24,1 millones, menos de la mitad que la media del periodo 2012-2016. Todo parece indicar que, durante estos años, se terminan de ejecutar obras y equipamientos aprobados e iniciados en periodos y ejercicios anteriores, pero que no se desarrollan nuevos proyectos.

Más de tres cuartas partes (76,4%) de estas inversiones se destinaron a edificios y solares, que son el capítulo más importante de las inversiones. Alrededor de la décima parte correspondió a mobiliario (9,3%) y a otros gastos (10,0%), y, por último, un 4,3% se destinó a sistemas informáticos.

La Administración local financia la mayor parte de las inversiones (el 55,5% del periodo) en bibliotecas públicas, reflejándose también aquí el protagonismo de los ayuntamientos (y de alguna diputación, concretamente la de Barcelona), si bien en un porcentaje inferior a lo asumido en el caso de los gastos corrientes. Por su parte, la Administración autonómica financió algo menos de la quinta parte (un 18,5%) de la inversión total durante 2012-2016.

Por su parte, la cantidad aportada por la Administración del Estado (que financia la edificación y equipamiento de las BPE) representó el 20,3% de los gastos de inversión en estos años, si bien se manifiesta una clara tendencia a la baja. Algo inferior fue la cantidad asumida por la Administración autonómica, un 18,5% de la inversión de estos años. Privada y Otros siguen siendo apenas relevantes, a excepción de las registradas en la provincia de Barcelona en 2015 y 2012.

Las diferencias inter-autonómicas son bastante acusadas: la mitad de la inversión en nuevas bibliotecas (49,1%) en este periodo se realizó en Cataluña, con una especial relevancia de la Administración local.

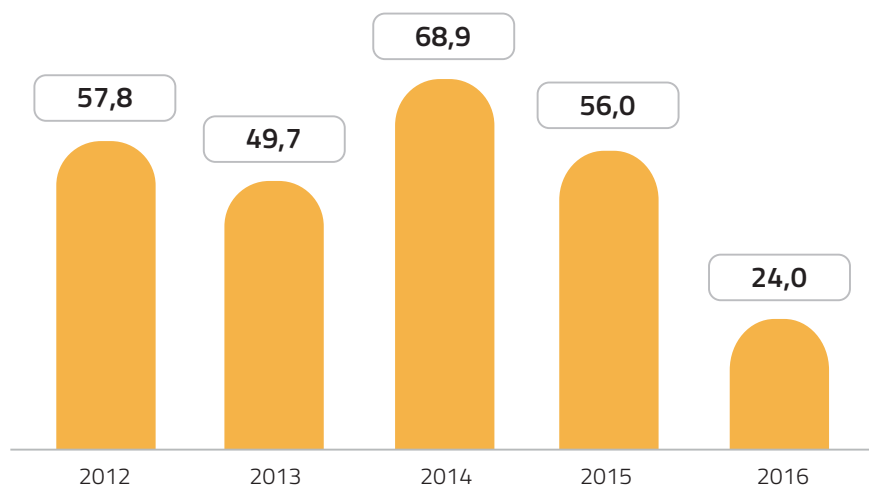


Gráfico 40. Gastos de inversión en las bibliotecas públicas españolas en millones de euros, 2012-2016.

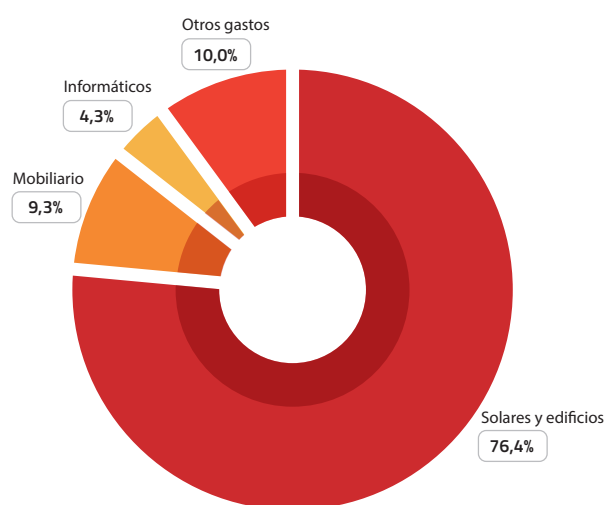


Gráfico 41. Distribución del gasto en inversiones, período 2012-2016. Total: 257,2 millones de euros.

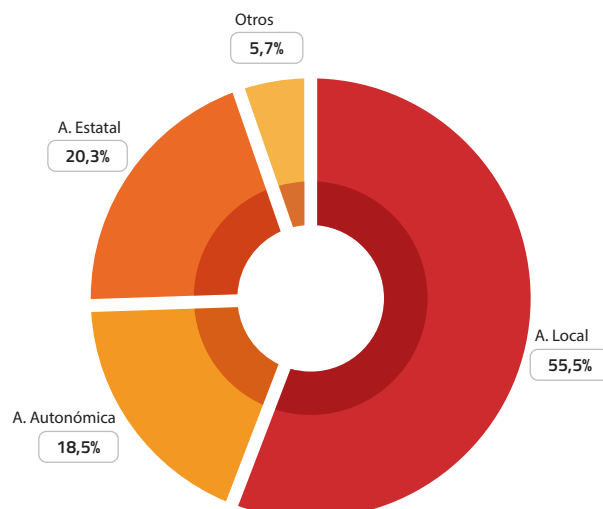


Gráfico 42. Financiación del gasto en inversiones, período 2012-2016. Total: 257,2 millones de euros.

4.4. El gasto en bibliotecas públicas en perspectiva amplia

Las cantidades destinadas al sistema bibliotecario público, en el contexto de los gastos del Estado, son muy pequeñas, y comenzaron una etapa de incremento a principios de los años noventa, que se ha venido sosteniendo hasta los años en que iniciamos nuestro análisis, los de la crisis económica. Si observamos la tendencia desde el año noventa, habríamos pasado de unos 60 millones de euros a los 463 de 2009, frenándose la mejora presupuestaria continuada en 2010, año que inicia un período de estancamiento mantenido en toda la etapa estudiada.

Si nos centramos en el siglo actual, también se observa fácilmente el estancamiento del periodo 2010-2016.

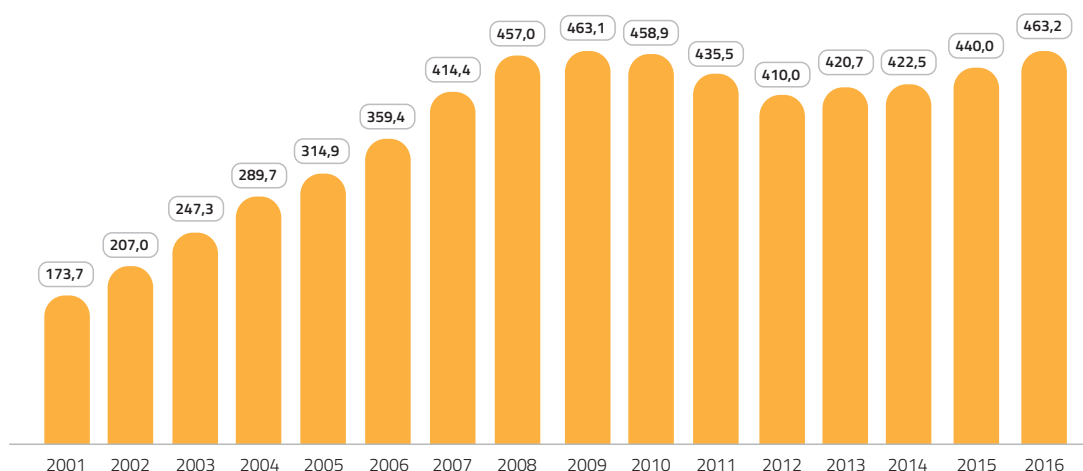


Gráfico 43. Evolución de la inversión en bibliotecas entre 2001 y 2016. Fuente: elaboración propia a partir de BPEC.

El incremento continuado que se da durante de más de veinte años tiene que ver con una necesaria modernización de los servicios culturales, sus infraestructuras y servicios, haciendo de nuestro país una realidad más cercana a la situación europea. Se produjo en un contexto de avance de las prestaciones del Estado y de transferencia a las comunidades autónomas de las competencias en muchos ámbitos y particularmente la Cultura. Sin embargo, esa financiación seguía siendo insuficiente cuando se detuvo en 2010, si consideramos las necesidades ciudadanas ante la rápida transformación tecnológica y social en el mundo actual. Las bibliotecas públicas aspiran a contribuir a hacer realidad servicios que garanticen el derecho a la información, el fomento de hábitos lectores, el apoyo al aprendizaje permanente y la empleabilidad así como la competencia digital crítica.

5.

informe fesabid

LA VALORACIÓN SOCIAL DE LAS BIBLIOTECAS

La valoración de las bibliotecas públicas por parte de la ciudadanía y el grado de satisfacción con las mismas es usualmente un análisis que se realiza en el marco de los programas de gestión de la calidad de las bibliotecas concretas, o bien de redes de bibliotecas en un ámbito municipal o autonómico. Serían ejemplos de este análisis el estudio realizado sobre la Comunidad de Navarra (Hernández-Sánchez, 2016), que calculó tanto el impacto socioeconómico como la valoración social a partir de un estudio de opinión con una muestra muy amplia (con resultados enormemente positivos), o las encuestas sobre los servicios municipales que en el caso de Barcelona van mostrando igualmente que las bibliotecas son un servicio muy valorado.

Como estudio de opinión con una consulta a personas de toda España solo tendríamos en el periodo estudiado una de las preguntas que se hacen en las entrevistas para el estudio de *Hábitos de lectura...* y de cuyas respuestas tenemos los resultados en 2011 y 2017.

	2011	2017
Aragón	7,8	8,6
Canarias	7,5	8,5
Madrid	7,8	8,5
Murcia	8,1	8,3
Asturias	7,9	8,3
Cataluña	8,1	8,3
Castilla-La Mancha	7,9	8,3
País Vasco	7,8	8,3
Navarra	7,8	8,3
España	7,8	8,2
Andalucía	7,7	8,1
C. Valenciana	7,9	8,1
La Rioja	8,0	8,1
Extremadura	7,5	8,0
Castilla y León	7,9	8,0
Galicia	7,9	7,9
Cantabria	7,5	7,9
Baleares	7,8	7,8

Tabla 8. Valoración de la biblioteca a la que suele acudir. Fuente: HLE, 2011 y 2017.

Vemos que, a pesar de las dificultades económicas, la positiva percepción ciudadana se mantiene e incrementa (de 7,8 a 8,2 en el periodo 2010-2017 de media para España), y que es una realidad común para toda España, pues —a pesar de las diferencias considerables de financiación y servicios— todas se encuentran entre el 7,6 de Baleares a las calificaciones por encima de 8,3 de Aragón, Canarias, Madrid, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco.

En España no hemos llegado a situaciones tan dramáticas como las sufridas por bibliotecas de países como el Reino Unido, que han vivido el cierre de unos 800 puntos de servicio de bibliotecas públicas entre 2010 y 2017 (Anstice, 2019) o el empleo masivo de personas voluntarias para reemplazar al personal profesional (Findlay-King, Nichols, Forbes y MacFadyen, 2018). Por eso ahora creemos que es difícilmente justificable no reactivar las políticas de apoyo a los servicios bibliotecarios con el trabajo conjunto de las distintas Administraciones y el apoyo del conjunto de los profesionales a través de sus organizaciones.

6.

informe fesabid

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El análisis realizado lleva a un diagnóstico de la situación de las bibliotecas públicas españolas, que sintetizamos a continuación, y del que deben derivarse actuaciones tanto en el plano específico de cada biblioteca –sobre sus necesidades, sobre los cambios conceptuales y prácticos en la gestión y en los servicios– como en las políticas generales de las administraciones responsables y sus órganos políticos.

Por nuestra parte, añadimos al diagnóstico algunas consideraciones y recomendaciones respecto de las prioridades para continuar impulsando el sistema bibliotecario y que éste alcance sus fines.

1. La crisis económica propició un estancamiento en la evolución positiva de las bibliotecas públicas españolas, poniendo en riesgo la adaptación de los servicios a las necesidades de los ciudadanos.

La crisis económica interrumpió una etapa continuada de avance en el sistema español de bibliotecas, que aun produciéndose a distinto ritmo en las distintas autonomías –por su nivel de riqueza, por sus políticas o por el compromiso de los municipios concretos– estaba conduciendo a una mejora de los servicios a la ciudadanía. A partir de 2011 se inició un descenso, que se detiene y se recupera moderadamente desde 2014-2015, haciendo que en 2016 se esté prácticamente en el nivel presupuestario de 2010. Esto puede parecer un impacto moderado de los recursos en términos generales pero se ha roto una tendencia de largo plazo de crecimiento, además de lo modesto de por sí de las cantidades destinadas al sistema bibliotecario público. Dada la rapidez en la innovación tecnológica y en la evolución de las prácticas culturales, la falta de presupuesto suficiente puede estar inhibiendo la capacidad de adaptación necesaria a los hábitos de consumo cultural y la atención suficiente del derecho a la información que han de garantizar las bibliotecas para el conjunto de la población. El fuerte descenso y el menor peso proporcional de todos los gastos, excepto el referido al personal, impide llevar a cabo muchos proyectos y actividades, así como actualizar adecuadamente las colecciones.

Para nosotros esta situación –con las diferencias propias de un conjunto que abarca más de cuatro mil bibliotecas y que dificulta las generalizaciones– implica estancamiento, que es una forma de retroceso en la calidad de los servicios prestados en relación con necesidades emergentes, en un sistema ya de por sí por debajo de la media europea en indicadores clave de dotaciones, servicios y uso.

2. Tienden a crecer los desequilibrios en la estructura de gasto de las bibliotecas.

Durante los años estudiados ha habido una estabilidad con una leve tendencia al alza de los gastos fijos de las bibliotecas públicas, como mantenimiento y personal; sobre todo ha habido un incremento del peso del gasto en personal respecto a los demás, llegando a niveles tan escasos de gasto en adquisiciones y otras partidas que se ha limitado la capacidad de actuación de las bibliotecas. Particularmente el descenso del gasto en adquisiciones supone un auténtico desplome que no se ha recuperado; solo se detiene porque llegó a un nivel del que sería difícil seguir bajando. Si a ello sumamos el menor gasto para actividades y proyectos, hay que concluir que ha tenido una incidencia negativa en la prestación de servicios.

3. Las bibliotecas públicas son cada vez más «locales».

Al desequilibrio en la estructura de presupuesto se ha sumado otro que está en relación directa: durante estos años las bibliotecas públicas han sido cada vez menos apoyadas por la Administración autonómica y General del Estado, con el fin de sus convenios para financiar adquisiciones bibliográficas y la rebaja de su gasto en inversiones, y han tenido que ser soportadas en mayor medida por sus titulares: los municipios y en general la Administración local. La mejora global en la financiación por parte de los ayuntamientos refleja el compromiso que en primera instancia tiene la Administración local en la prestación del servicio bibliotecario. Ello ha permitido absorber en parte los recortes económicos aplicados por las otras administraciones, de manera que en 2016 se han recuperado los niveles económicos de 2010 tras los fuertes descensos de los primeros años del periodo. Y tiene una evidente lectura positiva, pues los ayuntamientos han optado por mantener el servicio de biblioteca pública evitando que se viera más dañado. Ello supone un reconocimiento del valor de las bibliotecas, que se acredita además por los usos y por los estudios de opinión.

La contrapartida de ese carácter más «local» supone un riesgo desde el punto de vista de la garantía de los servicios bibliotecarios básicos que forman parte del derecho básico a la información, la educación y la lectura que han venido prestando las bibliotecas, porque no siempre la administración local dispone de los recursos económicos y la voluntad suficientes. Los municipios necesitan el apoyo financiero y de servicios de red por parte de las administraciones supra-municipales (las comunidades autónomas y, en su caso, las diputaciones, cabildos o consejos insulares), indispensables para prestar a los ciudadanos un servicio con cobertura y calidad suficientes, sea cual el tamaño de su población.

4. La crisis económica ha incrementado las desigualdades bibliotecarias interterritoriales.

Muchos datos segregados por comunidades autónomas sobre el número de puntos de servicio, la evolución del personal o a gran caída del presupuesto para adquisiciones reflejan un aumento de las diferencias en los sistemas bibliotecarios en función del grado de compromiso de las Administraciones. Factores como la estructura poblacional, sobre todo en las comunidades con municipios muy pequeños, influyen en la sostenibilidad de los servicios si no hay una política cultural con convicción en el papel educativo y social de las bibliotecas. La riqueza que supone para la ciudadanía la gestión política activa en sus propias comunidades y municipios de las competencias relativas a los servicios públicos, requiere un marco compensatorio que reequilibre la falta de medios económicos, y ello ha de venir dado por la recomposición y refuerzo de los sistemas provinciales y regionales y del Sistema Español de Bibliotecas, responsables en última instancia de que toda la ciudadanía española acceda satisfactoriamente al derecho a la información que facilitan las bibliotecas.

5. La evolución presupuestaria durante el periodo ha sido más bien una deriva por una falta de política bibliotecaria.

La evolución presupuestaria no parece responder a unos criterios definidos; no es fácil identificar quién y cuándo ha decidido que se reduzcan drásticamente las adquisiciones, ni quién y cuándo optó porque la Administración del Estado o las comunidades autónomas redujeran su aportación al sistema de lectura pública, haciendo que fueran los ayuntamientos los que las hubieran de mantener, cuando son el nivel de la administración con recursos más limitados. Ello pondría de relieve que:

- No hay una política bibliotecaria o un acuerdo inter-administrativo para repartir no competencias, sino las responsabilidades y obligaciones.
- No hay correspondencia entre las competencias otorgadas y asumidas por ley y los compromisos presupuestarios en la práctica.
- No hay equilibrio presupuestario ni en la distribución del tipo de gasto ni en la titularidad o financiación del mismo.
- No hay planificación ni un modelo generalizable en cuanto a cómo y con cuánto se financian las bibliotecas públicas, sino tantos como comunidades autónomas y provincias, pues no se aprovechan los modelos de «buenas prácticas» existentes.

6. El estancamiento en las visitas y el descenso en los préstamos es un síntoma de la necesidad de una mayor inversión en colecciones y servicios y de una reflexión profunda sobre hacia dónde dirigirlos.

El descenso en el número de préstamos y el estancamiento de las visitas presenciales, que se viene produciendo en los últimos años, parece ser una consecuencia del desplome de la inversión en fondos bibliográficos y una consecuente desactualización de las colecciones, a la que se sumarían otros motivos, como el cambio de hábitos culturales, que favorece el acceso a los contenidos por otras vías, y estaría vinculado también al descenso en el número de puntos de servicio.

Por otra parte, no parece que los usos presenciales estén siendo sustituidos completamente por el uso de servicios digitales, al menos en lo que al préstamo a través de las plataformas eBiblio y eLiburutegia se refiere.

Finalmente, para hacer un diagnóstico más detallado se hace necesario poner en valor otros usos de las bibliotecas, como pueden ser la asistencia a actividades o el uso de los servicios digitales, a través de las estadísticas.

7. Es necesario actualizar los modelos de recogida de datos estadísticos para mejorar el conocimiento real de la situación de las bibliotecas.

El sistema de recolección de datos estadísticos de las bibliotecas se debería completar y mejorar para poder conocer mejor todo lo que hacen las bibliotecas y sus usuarios, permitiendo que se visualice y evalúe la amplia gama de servicios que hoy prestan las bibliotecas.

Es necesario mejorar la fiabilidad y consistencia de la información estadística, para lo que resulta sumamente importante el compromiso por parte de los profesionales para proporcionar datos completos y fidedignos. Las Administraciones responsables deben realizar un esfuerzo por publicar la estadística bibliotecaria en plazos razonables. Por último cabe mejorar su difusión y usabilidad, permitiendo la descarga de series completas de datos sin agregar, fundamental para facilitar la investigación y explotación de datos.

Y también se hace preciso combinar las estadísticas oficiales sobre el conjunto del Sistema con análisis cualitativos: «No proliferan los estudios cualitativos de los públicos, ni se indaga en aspectos más sutiles o menos medibles (inclusión social, cohesión, educación en valores, fracaso escolar...) u otras cuestiones tan fundamentales como por ejemplo cuál ha sido el impacto de la crisis económica» (Cerro et al., 2019).

informe fesabid

REFERENCIAS

- Anstice, I. (2019). List of withdrawn libraries. *Public Libraries News*.
<http://www.publiclibrariesnews.com/about-public-libraries-news/news-topics>
- Arroyo Vázquez, N., Hernández Sánchez, H., y Villoldo Gómez, F. J. (2012). Bibliotecas y crisis económica (I). Las bibliotecas españolas en 2010. *Biblioblog*, 30 enero.
<https://biblioblog.org/2012/01/30/bibliotecas-y-crisis-i-las-bibliotecas-espanolas-en-2010/>
- Carrión-Gútiérrez, A. (2013). Informe de situación de las bibliotecas públicas españolas en 2012. *El Profesional de la Información*, 22(3), 250-258.
<https://doi.org/10.3145/epi.2013.may.09>
- Cerro, B., Soler, A., Vilariño, C., Barandiarán, T., Durán, G., Gómez-Hernández, J.-A., ... Penadés, H. (2019). *Libro y Bibliotecas (borrador para el Libro blanco de la creación, formación y desarrollo de públicos de la cultura)*. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte.
- Comalat Navarra, M. (2018). El bibliobús, una oportunitat per a una societat xarxa. Anàlisi del servei a Espanya i recomanacions. Universitat de Barcelona.
<https://www.tdx.cat/handle/10803/664065>
- Conecta (2012). *Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España. 2011. Informe de Resultados*. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España.
http://federacioneditores.org/img/documentos/Habitos_lectura_CompraLibros_2011.pdf
- Conecta (2018). *Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España. 2017. Informe de Resultados*. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España.
<http://federacioneditores.org/img/documentos/HabitosLecturaCompraLibros2017.pdf>
- European Bureau of Library Information and Documentation Associations. (2015). Public Libraries Statistics.
<http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-statistics.html>
- Fernández-Vara, A. (2014). *Bibliotecas públicas ante la crisis económica en España y la ciudadanía*. Universidad Carlos III de Madrid.
<https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2014/12/TFG-Ana-Fernandez-Vara1.pdf>
- Findlay-King, L., Nichols, G., Forbes, D., y MacFadyen, G. (2018). Localism and the Big Society: the asset transfer of leisure centres and libraries - fighting closures or empowering communities? *Leisure Studies*, 37(2), 158-170. <https://doi.org/10.1080/02614367.2017.1285954>
- Gobierno Vasco. (2017). *Bibliotecas año 2016*. San Sebastián: Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco.
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicacion_profesional_biblio/es_def/adjuntos/boletin2016es.pdf

- Gómez-Hernández, J.-A. (2012). Previsible agudización de la crisis en las bibliotecas públicas durante 2012. *Anuario ThinkEPI*, 6, 55-61.
<https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/30385>
- Gómez-Hernández, J.-A. (2013). Adaptación y reacciones del sector bibliotecario a la crisis de presupuestos públicos para cultura. *Anuario ThinkEPI*, 7, 138-145.
<https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/30349>
- Gómez-Hernández, J.-A. (2017). Las bibliotecas. En: J. A. Millán (Ed.), *La Lectura en España. Informe 2017*. Madrid: Federación de Gremios de Editores.
http://www.fge.es/lalectura/docs/J_A_Gomez-Hernandez_67-77.pdf
- Gómez-Yáñez, J.-A. (2014). *Estudio Fesabid: El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas*. Madrid: FESABID.
<http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid-valor-economico-social-servicios-informacion-bibliotecas.pdf>
- Hernández-Sánchez, H. (Ed.). (2001). *Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISBN: 9788489384330.
- Hernández-Sánchez, H. (2003). *Las colecciones de las bibliotecas públicas en España: informe de situación*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISBN: 9788489384422.
- Hernández-Sánchez, H. (dir.). (2008). *Las bibliotecas públicas en España : dinámicas 2001-2005*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISBN: 9788489384736.
http://travesia.mcu.es/portaln/jspui/bitstream/10421/1543/1/Las_Bibliotecas_Publicas_dinamicas.pdf
- Hernández-Sánchez, H. (2016). *El valor de las bibliotecas. Estudio de Impacto Socioeconómico de las Bibliotecas de Navarra*. Madrid: Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
<http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe>
- Hernández-Sánchez, H., y Arroyo-Vázquez, N. (2012). Las bibliotecas en España en 2011. *Anuario ThinkEPI*, 6, 48-54. <https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/30384>
- Hernández-Sánchez, H., y Arroyo-Vázquez, N. (2014). Efectos de la crisis económica en las bibliotecas españolas. *El Profesional de La Información*, 23(2), 158-164.
<https://doi.org/10.3145/epi.2014.mar.08>
- INE. (2018). Estadística de bibliotecas. <https://www.ine.es>

- Merlo-Vega, J.-A., y Chu, C.-M. (2015). Out of Necessity Comes Unbridled Imagination for Survival: Contributive Justice in Spanish Libraries during Economic Crisis. *Library Trends*, 64(2), 299-328. <https://doi.org/10.1353/lib.2015.0051>
- Ministerio de Cultura y Deporte. (2018a). Bibliotecas públicas españolas en cifras. <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebp/portada.html>
- Ministerio de Cultura y Deporte. (2018b). *Panorámica de la edición española de libros 2017*. Madrid. <http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:0e7cba6c-9033-4600-baab-b80c14b107d1/panoramica.pdf>
- Ministerio de Cultura y Deporte. (2019). Panorámica de las 53 Bibliotecas Públicas del Estado. <http://mapabpe.mcu.es>
- Observatorio de la Lectura y el Libro. (2016). eBiblio 2015. http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/eBiblio/eBiblio_2015_est.pdf
- Observatorio de la Lectura y el Libro. (2017). eBiblio 2016. http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/eBiblio/eBiblio_2016_est.pdf
- Pérez-Salmerón, G. (2014). Librarians facing the crisis: action. En: *IFLA World Library and Information Congress: Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge*. Lyon, 16-22 agosto. <http://library.ifla.org/904/>
- Rebiun. Grupo de Trabajo de Estadística. (2019). Consulta de Datos. Indicadores Rebiun. <https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage>
- Subdirección General de Estadística y Estudios (2018). *Anuario de estadísticas culturales 2018*. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte. <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/anuario-de-estadisticas-culturales-2018/cultura-sociedad-estadisticas/21521C>
- Togores, R. (2014). *El valor de las bibliotecas públicas en la sociedad: El caso de la red de bibliotecas municipales*. Barcelona: Diputació de Barcelona. http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/valor_social_bibliotequesXBM_cast.pdf
- Villoldo Gómez, F. J., Hernández Sánchez, H., y Arroyo Vázquez, N. (2012). Bibliotecas y crisis económica (II). Las bibliotecas públicas en 2010: el desarrollo de la última década, en peligro. *Biblioblog*, 13 febrero. <https://biblioblog.org/2012/02/13/bibliotecas-y-crisis-economica-ii-las-bibliotecas-publicas-en-2010-el-desarrollo-de-la-ultima-decada-en-peligro/>

Con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte.



Con el apoyo de:



ISBN: 978-84-939694-2-4



<http://www.fesabid.org>